

# DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTTIQ+



---

Coordinadoras

ROSA MARÍA CUELLAR GUTIERREZ

MARIA EUGENIA CAMPOS ZAVALA



Fondo  
Editorial para la  
**Investigación  
Académica**

# Sinopsis

El segundo tomo del libro Derechos Humanos LGBTTTTIQ+ es una obra que aborda de manera exhaustiva la importancia de la protección de los derechos y su vinculación con la diversidad sexual y la comunidad LGBTTTTIQ+. A través de estos primeros cuatro capítulos se exploran diferentes temáticas relacionadas con la violencia de pareja, la violencia intragénero, la pensión compensatoria, la precariedad laboral, el cupo mínimo laboral, la adopción, el matrimonio igualitario y la igualdad jurídica. El viaje comienza con una profunda exploración de las dinámicas intrínsecas a las relaciones de pareja en la comunidad LGBTTTTIQ+ en el Capítulo I, desentrañando el velo de la "Violencia de pareja y violencia intragénero en parejas LGBTTTTIQ+". Este análisis meticuloso no solo identifica las manifestaciones de violencia, sino que también propone estrategias para erradicar este fenómeno insidioso y garantizar relaciones basadas en el respeto y la igualdad. El Capítulo II nos sumerge en las complejidades legales y económicas que rodean a la población LGBTTTTIQ+ en el Estado de Veracruz, centrándose en la pensión compensatoria y su aplicación en el Estado de Veracruz. Aquí, se arroja luz sobre las inequidades económicas que persisten y se aboga por una revisión integral de las políticas para asegurar una distribución justa de los recursos. Posteriormente, el Capítulo III abre la puerta a la realidad laboral de la comunidad trans en México, señalando la urgencia de una ley de cupo mínimo laboral como medio para abordar la precariedad laboral y construir un ambiente más inclusivo y equitativo. La obra culmina con el Capítulo IV, donde se examina el entrelazamiento crucial entre adopción, matrimonio igualitario e igualdad jurídica de las personas LGBTTTTIQ+. Este libro es, en última instancia, una contribución vital al diálogo en curso sobre la universalidad e inalienabilidad de los Derechos Humanos, destacando la necesidad de un compromiso continuo con la justicia y la igualdad para todos.



# DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTTIQ+



---

Coordinadoras

ROSA MARÍA CUELLAR GUTIERREZ

MARIA EUGENIA CAMPOS ZAVALA

El tiraje digital de esta colección: “Derechos de la comunidad LGBTTTIQ+” y en particular de este “Tomo II” se realizó posterior a un riguroso proceso de arbitraje doble ciego, llevado a cabo por dos expertos miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) en México, así como revisión anti plagio y aval del Consejo Editorial del Fondo Editorial para la Investigación Académica (FONEIA). Primera edición digital de distribución gratuita, febrero de 2024.

El Fondo Editorial para la Investigación Académica es titular de los derechos de esta edición conforme licencia Creative Commons de Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). Las coordinadoras Rosa María Cuellar Gutierrez y María Eugenia Campos Zavala, así como cada una de las coautoras y coautores son titulares y responsables únicos del contenido.

Diseño editorial y portada: Williams David López Marcelo

Requerimientos técnicos: Windows XP o superior, Mac OS, Adobe Acrobat Reader.

Editorial: Fondo Editorial para la Investigación Académica (FONEIA). [www.foneia.org](http://www.foneia.org)  
[consejoeditorial@foneia.org](mailto:consejoeditorial@foneia.org), 52 (228)1383728, Paseo de la Reforma Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México

COLECCIÓN DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+:

ISBN: 978-607-69529-1-7



TOMO II:

ISBN: 978-607-69529-7-9



## CONTENIDO

<b>CAPÍTULO I. EL ESTIGMA DE LA VIOLENCIA DENTRO DE LAS RELACIONES DE PAREJA DEL MISMO SEXO: VIOLENCIA INTRAGÉNERO .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO II. PENSIÓN COMPENSATORIA EN LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ SUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ.....</b>	<b>17</b>
<b>CAPÍTULO III. PRECARIEDAD LABORAL DE LA COMUNIDAD TRANS EN MÉXICO: RUMBO A LA APROBACIÓN DE LA LEY DE CUPO MÍNIMO .....</b>	<b>37</b>
<b>CAPÍTULO IV. ADOPCIÓN EN MATRIMONIOS IGUALITARIOS COMO DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA EN MÉXICO .....</b>	<b>56</b>

## INTRODUCCIÓN

Esta publicación se presenta como una amalgama de cuatro capítulos que tienen en común la diversidad sexual y los Derechos Humanos. En este segundo tomo, visitamos los temas de: violencia de pareja, violencia intragénero, pensión compensatoria, precariedad laboral, cupo mínimo laboral, adopción, matrimonio igualitario e igualdad jurídica. A lo largo de estas páginas, cada uno de los temas presentados brinda al lector un complemento a la visión actual de hechos sociales desde varias perspectivas, siempre en estrecha vinculación con la comunidad LGBTTTIQ+.

En el complejo tejido de la realidad de la comunidad LGBTTTIQ+, la violencia de pareja y la violencia intragénero emergen como preocupaciones fundamentales. El primer tema de este análisis se sumerge en las dinámicas específicas que rodean la violencia de pareja e intragénero en parejas LGBTTTIQ+. Este capítulo busca arrojar luz sobre las diversas formas de violencia que pueden existir dentro de estas relaciones, ofreciendo una comprensión profunda de los desafíos únicos que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ en el ámbito doméstico y promoviendo un diálogo crítico para erradicar estos comportamientos nocivos.

En el ámbito legal y financiero, el segundo tema destaca la pensión compensatoria en la población LGBTTTIQ+ y su aplicación en el Estado de Veracruz. Este capítulo explora las inequidades económicas que enfrenta la población LGBTTTIQ+, particularmente en el contexto específico del Estado de Veracruz. A través de un análisis detallado de la legislación y casos prácticos, se busca identificar y abordar las barreras legales que limitan el acceso a la pensión compensatoria para esta comunidad, abogando por la igualdad de derechos y oportunidades.

Avanzando hacia la esfera laboral, el tercer tema destaca la precariedad laboral de la comunidad trans en nuestro país y aboga por la implementación de una legislación que regule el cupo mínimo laboral. Este capítulo examina las dificultades únicas que enfrenta la comunidad trans en el ámbito laboral y argumenta la necesidad crítica de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y pongan fin a la discriminación laboral. Estos temas, entrelazados por la búsqueda constante de la igualdad jurídica, reflejan los desafíos multifacéticos que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ en su lucha por un trato justo y equitativo en todos los aspectos de la vida cotidiana.

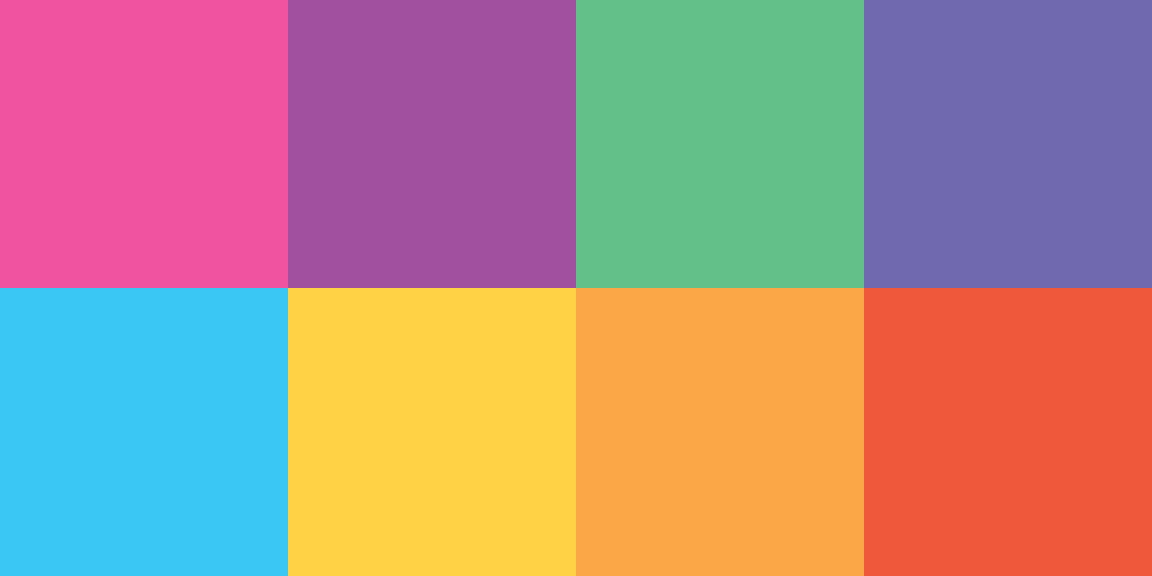
La conclusión global extraída de los temas abordados en el segundo tomo del libro *Derechos Humanos LGBTTTIQ+* es que existe una interconexión profunda entre las diferentes áreas examinadas. La

homoparentalidad, el impacto de los prejuicios sociales, los desafíos legales que enfrentan los matrimonios igualitarios, la violencia intragénero, la situación laboral precaria de la comunidad trans y la necesidad de una ley de cupo mínimo se entrelazan en un tejido complejo de discriminación, vulneración de derechos y desigualdad.

A través de estas páginas, se destaca la importancia de visibilizar y abordar los problemas jurídicos y sociales que afectan a la comunidad LGBTTTIQ+I en un contexto heteronormativo. La discriminación, expresada tanto en la esfera social como jurídica, se erige como un obstáculo significativo para el disfrute pleno de una vida digna. La necesidad de concientización y la superación de creencias y estereotipos que perpetúan la discriminación son subrayadas como acciones cruciales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

El análisis también señala la responsabilidad de los jueces especializados en materia familiar en el Estado de Veracruz de aplicar las normas que se dirigen a las personas LGBTTTIQ+ sin prejuicios, reconociendo la igualdad de las relaciones de parejas del mismo sexo. La implementación efectiva de leyes como el matrimonio igualitario y la necesidad de una legislación que proteja los derechos laborales de la comunidad trans se destacan como pasos fundamentales hacia la construcción de una sociedad más igualitaria y justa. En última instancia, se subraya que estas medidas no solo son actos de justicia social, sino que también contribuyen positivamente al desarrollo económico y la diversidad en el país.

*Guillermo Cruz González*  
*febrero 2024*



# **EL ESTIGMA DE LA VIOLENCIA**

## **DENTRO DE LAS RELACIONES DE PAREJA**

### **DEL MISMO SEXO: VIOLENCIA INTRAGÉNERO**

---

**Lorena Tornero Pedro**

**María Eugenia Campos Zavala**

**Rosa María Cuellar Gutierrez**

# **CAPÍTULO I**

## **EL ESTIGMA DE LA VIOLENCIA DENTRO DE LAS RELACIONES DE PAREJA DEL MISMO SEXO: VIOLENCIA INTRAGÉNERO**

Lorena Tornero Pedro\*  
María Eugenia Campos Zavala\*\*  
Rosa María Cuellar Gutierrez\*\*\*

**SUMARIO:** I. Introducción; II. Antecedentes nacionales e internacionales del movimiento LGBTTTIQ+; III. El reconocimiento de los Derechos Humanos de los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+; IV. El concepto violencia intragénero; V. Características de la violencia intragénero; VI. Especificidades de la violencia intragénero; VII. Medidas adoptadas frente a la violencia intragénero; VIII. Conclusiones; IX. Anexo. Glosario; X. Lista de fuentes.

### **I. Introducción**

Los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, o más específicamente, de la población Lésbico-Gay-Bisexual-Trans-Intersexual, han alcanzado significativos avances en la satisfacción material de derechos que, durante años, fueron limitados por el Estado y la sociedad en general a través de actos discriminatorios. Esta población se encuentra entre los grupos en situación de vulnerabilidad, junto con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, personas indígenas y mujeres. La vulnerabilidad puede ser variable y dinámica, permitiendo que una persona experimente diversos actos discriminatorios e injusticias sociales al mismo tiempo.

Actualmente, el Estado de Veracruz destaca como uno de los más violentos contra los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, registrando un alto número de homicidios por razones de género, siendo solo superado por Oaxaca, según estadísticas de la Asociación Civil Letra S (Brito, A., 2023). Factores como la homofobia, sexismo, misoginia, machismo, ideologías impuestas por la religión y roles de género contribuyen a la perpetración de crímenes de odio, actos cometidos principalmente por la identidad de género u orientación sexual de la víctima y respaldados por la sociedad (Juárez, A., 2011), acompañados

---

\*Alumna de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, sede Xalapa, del Sistema de Enseñanza Abierta, correo electrónico: zS22000347@estudiantes.uv.mx.

\*\* Profesora invitada de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, sede Xalapa, correo electrónico: ma\_eugenia\_campos@hotmail.com

\*\*\*Coordinador y Profesor de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, sede Xalapa, correo institucional: rcuellar@uv.mx

de tortura y tratos inhumanos que reflejan el rechazo y odio hacia lo diferente.

Ante esta situación, colectivos de asociaciones civiles demandan la creación de una fiscalía especializada en delitos de género contra la población LGBTTTIQ+ en Veracruz, solicitando un seguimiento oportuno de las muertes violentas y un registro adecuado. Según datos obtenidos en 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTTTIQ+ en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género (Brito, A. 2023).

A pesar de la violencia sistemática ejercida hacia la comunidad LGBTTTIQ+, esta también experimenta relaciones de pareja violentas, aunque hablar sobre la violencia en parejas del mismo sexo sigue siendo un estigma. La población LGBTTTIQ+ a menudo se encuentra atrapada en un círculo vicioso de discriminación y violaciones a los Derechos Humanos, ya que las constantes agresiones llevan a la legitimación de atributos negativos y, a su vez, la legitimación social lleva al individuo a considerar que ese es el trato que merece o que no hay solución.

Las estadísticas de violencia intragénero revelan que, en su mayoría, las personas en relaciones casuales o estables experimentan violencia psicológica, mediante humillaciones, amenazas verbales y aislamiento. En parejas matrimoniales, las personas que sufren violencia tienden a mostrar inactividad (Aldarte, 2010), similar a lo que ocurre en parejas heterosexuales.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015), el 61.1% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación sexual, violencia física o acoso por una pareja íntima, al menos una vez en sus vidas. No obstante, documentar este tipo de violencia es difícil, ya que se desarrolla en la esfera privada. La falta de denuncia suele ocurrir porque implica reconocerse públicamente como persona lesbiana, gay, bisexual, etc., frente a autoridades poco sensibilizadas.

Este proyecto, realizado con metodología exploratoria y descriptiva, busca divulgar información, sensibilizar y concientizar sobre el respeto y la promoción de los Derechos Humanos. El presente capítulo aborda el contexto histórico y social del movimiento LGBTTTIQ+, una aproximación a los Derechos Humanos de esta comunidad y una exploración de la violencia intragénero para entender sus características, diferencias y similitudes con la violencia de género hacia las mujeres en relaciones heterosexuales. La pregunta central de investigación, por lo tanto, se orienta a cuáles son las características, diferencias y similitudes de la violencia intragénero, frente a la violencia de género hacia las mujeres en relaciones heterosexuales, y cuáles son las medidas adoptadas frente a esta problemática.

## **II. Antecedentes nacionales e internacionales del movimiento LGBTTTIQ+**

Para comprender cómo iniciaron los principales movimientos de liberación homosexual, resulta conveniente partir del contexto que había en México durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI. A continuación, se destacan algunos de los sucesos históricos y sociales más relevantes del movimiento LGBTTTIQ+ en el ámbito nacional e internacional.

A comienzos del siglo XX, uno de los hechos más conocidos fue “el baile de los 41”, llevado a cabo la madrugada del 18 de noviembre de 1901, en el cual 42 hombres fueron encontrados en un baile clandestino vestidos con pelucas, sombreros, aretes, entre otros artículos. En dicho baile se encontraban personas pertenecientes a la clase alta de la sociedad porfiriana. Como resultado, fueron aprehendidos un total de 41 hombres, ya que uno de ellos era Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Porfirio Díaz. En esa época, la homofobia y el machismo estaban fuertemente arraigados en la sociedad y en la prensa mexicana, que se encargó de caricaturizar y parodiar a los hombres que estuvieron presentes en ese baile (Secretaría de Cultura, 2019).

De 1910 a 1917, durante la Revolución Mexicana, las mujeres lucharon junto a los hombres sin ser reconocidas. Aunque ya se solicitaba el derecho al sufragio femenino, este no fue otorgado en la Constitución de 1917. Más adelante, los movimientos feministas destacados durante los años 50 fueron un parteaguas que favoreció el cambio de mentalidad de la sociedad en general y cuyas ideas respaldaron la lucha de los colectivos que promovían los derechos de los hombres homosexuales y de las mujeres lesbianas. En 1953, se otorgó en México el derecho al voto para las mujeres, y en 1955, las mujeres votaron por primera vez en las elecciones federales (Vocesfeministas.mx, 2019). Este cambio no sucedió de la noche a la mañana, ya que para que este derecho fuera otorgado, ocurrieron movimientos reivindicatorios que cuestionaban fuertemente los roles de género, el derecho a decidir sobre la maternidad, la participación política de las mujeres, entre otros temas.

Por otra parte, en 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), reconocida por ser una organización que reunía a los mejores psiquiatras en Estados Unidos, realizó su primer Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales (DSM), incluyendo la desviación sexual como un trastorno de la personalidad. Este hecho propició que en los años siguientes se realizaran terapias de conversión con el propósito de remediar lo que se consideraba una enfermedad mental.

Posteriormente, en los años 60 y 70, durante el gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970), ocurrieron eventos que favorecieron el inconformismo de la sociedad civil, con marchas y protestas de trabajadores petroleros,

ferrocarrileros, electricistas, telegrafistas, profesores de enseñanza primaria y secundaria, y el surgimiento de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) (Monsiváis, C., 2011).

La organización de los Juegos Olímpicos de 1968 también influyó en la creación de conflictos internos dentro del país. Se encontraban en disputa varias peticiones sociales que fueron reprimidas por los preparativos de los Juegos Olímpicos e intereses de empresas privadas que finalmente lograron silenciar las huelgas y protestas con actos de violencia y sujeción por parte de actores políticos, como la matanza de Tlatelolco el dos de octubre de 1968.

Así lo señala Monsiváis (2011):

Antes de 1968, en la apariencia, México es absolutamente homogéneo: una religión, la católica, un partido, el PRI, el autoritarismo de un género en el poder (todos los puestos políticos son de hombres); un único modo de ser varones y hembras; un infierno social a la disposición de los marginales de la economía, la política, las opciones sexuales.

Mientras tanto, en Estados Unidos, uno de los hechos históricos más relevantes tuvo lugar en el bar Stonewall de Nueva York en 1969, dando inicio al movimiento del Gay Liberation Front. Este grupo estaba compuesto por gays, lesbianas y travestis que se enfrentaron directamente a la intimidación policial, defendiendo con orgullo la homosexualidad como un Derecho Humano y libertad individual. Al año siguiente, en 1970, se llevaron a cabo marchas para conmemorar los disturbios, marcando la primera marcha del orgullo LGBTTTIQ+. Estas marchas de protesta y orgullo lograron expandirse por Europa, proporcionando una mayor visibilidad y empoderamiento a la comunidad.

En México, la primera marcha LGBTTTIQ+ tuvo lugar el 29 de junio de 1979, bajo el nombre de “Marcha del Orgullo Homosexual de México”, organizada por un grupo de hombres que se autodenominó “Frente de Liberación Homosexual de México”. Posteriormente, durante la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, otros grupos LGBTTTIQ+ se unieron a la manifestación, respaldados por estudiantes de la UNAM (Huacuz, F., 2023).

De manera similar, en varios países de América Latina, como Chile, Argentina y Brasil, se desarrollaban simultáneamente movimientos de Liberación Homosexual que creaban una base de colaboración entre la diversidad sexual, protestando contra la discriminación y la violencia.

De acuerdo con Caro, F. y Simonetto, P. (2019):

Las múltiples conexiones globales entre latinoamericanos como el caso de Argentina, Brasil, México y Colombia, o las referencias del continente europeo [...] formaron un mapa complejo y cambiante en el que con distintos ritmos se definió una agenda de liberación sexual.

Como resultado de las continuas manifestaciones y la gran cantidad de personas que se unieron a ellas en 1973, la segunda versión del manual DSM (DSM-II) “eliminó la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección de Desviaciones Sexuales” (Iguales, 2012).

Una de las cartas presentadas en la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en 1999 en México expresaba lo siguiente:

Durante mucho tiempo, los homosexuales, lesbianas, transgénicos y bisexuales hubieron de vivir y morir ocultando su diferencia, soportando en silencio persecuciones, desprecios, humillaciones, extorsiones, chantajes, insultos, golpes y asesinatos.

Lo diferente tuvo que soportar el ser reducido en su calidad humana por el simple hecho de no ser según una normalidad sexual inexistente, pero fingida y convertida en bandera de intolerancia y segregación. Víctimas en todos los niveles sociales, objetos de chistes, chismes, insultos y muertes, los diferentes en su preferencia sexual callaron una de las injusticias más antiguas en la historia.

No más [...]. (Monsiváis, C. 2011).

Durante los años 80 y 90, los estereotipos y la discriminación aumentaron debido a la aparición de una nueva enfermedad descubierta en Estados Unidos: el VIH, SIDA, la cual se propagó rápidamente en México y afectó principalmente a los hombres de la comunidad LGBTTTIQ+. Las personas seropositivas fueron fuertemente discriminadas, despedidas de sus trabajos e incluso se les negaron los servicios de salud. Este hecho fue de gran relevancia para la comunidad LGBTTTIQ+, ya que los situó nuevamente frente al estigma de portar una nueva enfermedad desconocida pero asociada desde el principio a la diversidad sexual.

Durante los años siguientes, los avances para la comunidad LGBTTTIQ+ fueron lentos; sin embargo, con las constantes protestas y cambios en la mentalidad influenciados por los debates feministas y los derechos reconocidos internacionalmente, poco a poco se fue construyendo una base para la aplicación de estos derechos.

### **III. El reconocimiento de los Derechos Humanos de los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+**

Como se analizó en el apartado anterior, de los antecedentes históricos y sociales se advierte el complejo proceso que ha tenido la comunidad LGBTTTIQ+ para materializar Derechos Humanos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida, a la integridad personal, entre otros

que se encuentran interrelacionados. Con la internacionalización de los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha definido como categorías protegidas la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género.

La Corte ha determinado, teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el Artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el Artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas, que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está proscrita por la Convención, cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019).

Por tal motivo, en la actualidad, los jueces tienen la obligación de cerciorarse cuando se encuentran frente a un caso que involucre a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ de que derechos como la identidad de género, la orientación sexual o la expresión de género no se encuentren vulnerados por las instituciones. A esto lo han llamado categorías sospechosas, definidas como:

Aquellos criterios específicamente mencionados en el Artículo 1 de la Constitución Federal como motivos prohibidos de discriminación: origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Asimismo, de acuerdo con lo que ha sostenido la Primera Sala, son categorías sospechosas aquellas que:

- I. Se fundan en rasgos permanentes de las personas, de los cuales no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad;
- II. Han estado sometidas históricamente a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y
- III. No constituyen por sí mismos criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans “constituye una forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género” y “suele ser especialmente despiadada

en comparación con otros delitos motivados por prejuicios” (Naciones Unidas, 2011). Por esta razón, al analizar un caso que involucre a personas de la comunidad LGBTTTIQ+, es necesario que los jueces y juezas realicen un escrutinio estricto para verificar que no existan violaciones a sus Derechos Humanos por las categorías protegidas y, de ser así, que estas sean reparadas en proporción al daño ocasionado.

Al respecto, conviene analizar la sentencia “Vicky Hernández y otras vs. Honduras”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos suceden en Honduras en junio de 2009, cuando Vicky Hernández falleció en medio de un contexto de violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+. Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y portadora de VIH. Todos estos factores la posicionaron en una clara situación de vulnerabilidad, debido a las múltiples discriminaciones que vivió y que finalmente se consumaron en su muerte.

Resulta particularmente interesante el voto parcialmente disidente de la Jueza Elizabeth Odio Benito, en el cual centra su razonamiento en la alegada confusión del término identidad de género y que, de manera textual, indica que la “identidad de género” es una expresión difusa que hoy busca erróneamente sustituir “sexo” por esa “identidad”. Por otra parte, sostiene que la Convención de Belém do Pará no es la norma adecuada para determinar la raíz de la violencia de género contra Vicky Hernández. No obstante, hay que precisar que una mujer trans puede tener, como es el caso de Vicky Hernández, varios factores que la sitúen en una posición de discriminación. Por tal motivo, además de observar este caso con perspectiva de género y Derechos Humanos, se debe analizar a través de un enfoque interseccional, con el objetivo de determinar de forma integral todas las acciones que la llevaron a su muerte (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021).

Ahora bien, uno de los avances a nivel nacional que podríamos mencionar en el presente texto es la incorporación del derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma de 2001 publicada en el Diario Oficial de la Federación, señaló la prohibición de discriminación por preferencias. Sin embargo, esta redacción era inexacta y daba lugar a la incertidumbre jurídica al no especificar qué tipo de preferencias. Posteriormente, con la reforma en materia de Derechos Humanos promulgada el 10 de junio de 2011, el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue más preciso al señalar la prohibición de discriminación por preferencias sexuales. Mientras tanto, en el Código Penal Federal y el Código Local, se encuentra tipificado el delito de discriminación motivado por preferencias sexuales.

Ahora bien, la Ciudad de México en 2006 publicó en la Gaceta Oficial para el Distrito Federal la Ley de sociedades de convivencia para el Distrito Federal. La misma la define como “un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua” (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2017).

#### **IV. El concepto violencia intragénero**

A pesar de los grandes avances y reformas constitucionales que se han llevado a cabo en el sistema mexicano e interamericano, aún quedan pendientes varios temas para lograr de forma integral la protección de los Derechos Humanos de las personas de la población LGBTTTIQ+.

En este sentido, en el presente apartado se aborda el tema de la violencia intragénero, es decir, aquella violencia que existe entre parejas del mismo sexo, el cual ha sido poco estudiado. El término “violencia intragénero” ha sido introducido principalmente por asociaciones civiles dedicadas al estudio de diversos temas relacionados con la comunidad LGBTTTIQ+.

De acuerdo con la asociación Aldarte (2012):

Se denomina violencia intragennero a aquella violencia que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, constituyendo, al igual que en la violencia del hombre dirigida hacia la mujer, un ejercicio de poder y siendo objetivo de la persona que abusa dominar y controlar a su víctima.

En el mismo sentido, así lo describe Puggelli, A. (2016), a través de la Organización No Gubernamental COGAM:

La violencia intragennero es aquella que se produce en el ámbito de parejas o exparejas del mismo sexo/género y puede ser -como todas las violencias- psicológica, física, sexual, económica, etc. Es una conducta puesta en marcha por uno/a de los/as integrantes para controlar y/o someter a la persona.

En el caso de la violencia de género el reparto de poder se hace de una forma determinante a través del sexismo. En la violencia intragénero este reparto atiende a otras variables como pueden ser el nivel de estudios, económico, la raza, la situación administrativa en el país de residencia, la salud, la edad, la visibilidad, etc.

Mientras que (Langhinrichsen-Rohling, 2010, citado en Pereira R., López, D. y Campuzano J., 2017) sostiene que “la violencia puede ser ejercida por cualquier persona, sin importar su sexo y género, de modo que las mujeres pueden ocupar un rol de agresoras frente a los hombres e incluso victimizar a otras personas de su mismo sexo”.

## **V. Características de la violencia intragénero**

La violencia intragénero no se encuentra regulada en las leyes de protección contra la violencia de género, ya que el Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala, en el apartado de los delitos de violencia de género, de manera específica aquellos actos cometidos por un hombre hacia una mujer.

De manera más específica, describe la autora Puggelli, A. (2016):

La violencia intragénero no se articula en torno al sexismo ni a la desigualdad de poder entre mujeres y hombres. Por tanto, aunque algunas de las manifestaciones de violencia intragénero coincidan con las de violencia de género, no es menos cierto que existen especificidades que le son propias, además de un origen distinto.

De acuerdo con Aldarte, algunas de las características de este tipo de violencia son las siguientes:

- Es un tipo de violencia de la que no hay registros, estadísticas o informes que permitan cuantificar qué porcentaje es susceptible de vivir este tipo de violencia.
- Debido a que el tema de la orientación sexual o preferencias sexuales no son reconocidos públicamente de forma común, menos el hecho de reconocer y verbalizar la violencia que se vive dentro de estas relaciones.
- Existe una falta de concientización de que se vive violencia, la cual se podría comparar con la dinámica que existe en la violencia de género contra las mujeres en relaciones heterosexuales y para la cual el Instituto Politécnico ha realizado el violentómetro, el cual es una herramienta que se encarga de medir la violencia.
- Discriminación social en las relaciones lésbicas y homosexuales. Las relaciones de personas de la diversidad sexual aún se encuentran frente a la discriminación.
- Mitos sobre las relaciones lésbicas y homosexuales. Al ser la violencia contra las mujeres la forma más común de violencia hay mitos acerca de que en una relación lésbica, por ejemplo, pueda existir una relación de dominación de una persona frente a otra del mismo género.

## **VI. Especificidades de la violencia intragénero**

Al igual que sucede en la violencia de género contra las mujeres en relaciones de pareja heterosexuales, podemos encontrar áreas relacionadas que se traspasan a las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, como, por ejemplo, el círculo de la violencia, los mitos del amor romántico y los tipos de violencia (física, psicológica, económica, patrimonial, entre otras).

No obstante, en este tipo de violencia hay variables como el outing, es decir, la amenaza de revelar información privada referente a la vida sexual, orientación sexual o expresiones de género. “La pareja puede amenazar con revelar la orientación sexual de la víctima a sus jefes, amigos y familiares, lo que puede llevar a un gran aislamiento social y al despido” (Brown, 2008; Ortega, 2014; como se citó en Alises, C. 2021).

### **VII. Medidas adoptadas frente a la violencia intragénero**

Aldarte, en su informe 2012, señala que entre las medidas adoptadas por las víctimas de violencia se encuentran tres acciones:

- El ataque: el 72,2% afirma haber roto la relación y cualquier vínculo de unión. Aunque es la opción que ha llevado a cabo la mayoría de las personas encuestadas, es cierto que existe una mayor predisposición entre las personas que están solteras.
- El contraataque: tan sólo una minoría de 9,2% declara haber interpuesto una denuncia.
- El asesoramiento: un 12,3% acude a alguna asociación y un 10,8% a servicios sociales. Esta actuación se relaciona con el colectivo de personas casadas o parejas de hecho.

Cabe señalar, como se mencionó líneas arriba, que la violencia intragénero también es perpetrada por exparejas. Asimismo, hay que precisar que en todo caso, “la violencia es responsabilidad únicamente de quien maltrata, y en su mano está ejercerla o desaprenderla” (Puggelli, A. 2016).

### **VIII. Conclusiones**

Aunque la violencia intragénero tiene fuertes influencias del sexismo y el machismo, hay que tener en cuenta que las formas de relacionarse han sido desarrolladas en un sistema patriarcal y de dominación masculina. Por lo tanto, las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo no están exentas de desarrollar este tipo de interacciones, donde la violencia va en aumento a lo largo de la relación.

El derecho a crear un proyecto de vida y ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad deben estar garantizados sin las limitaciones del Estado para todas las personas. Ante ello, la vulneración de los Derechos Humanos, como la vida y la identidad de género, entre otros, debe ser sancionada. Por tal razón, es importante la visibilización de los diversos problemas jurídicos y sociales que surgen frente a un país heteronormativo en el cual no se han diseñado normas suficientes, oportunas ni adecuadas para la diversidad de género, lo cual representa un impedimento para el disfrute de una vida digna.

Finalmente, es importante recordar que la discriminación se ejerce a diario contra la comunidad, por lo tanto, es crucial concientizarnos y dejar de replicar creencias y estereotipos que perpetúen la discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ+.

## **IX. Anexo. Glosario**

**Bisexual.**—Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída por personas del mismo sexo o de un sexo distinto. (CIDH, s/f.)

**Discriminación.**—Se refiere a una diferencia arbitraria que redunde en detrimento de los Derechos Humanos. (Corte IDH, 2012)

**Estigma.**—Proceso de deshumanización, degradación, desacreditación y desvaloración de las personas de ciertos grupos de la población. Su objeto es un atributo, cualidad o identidad que se considera “inferior” o “anormal” —siendo la “normalidad” de una supuesta mayoría la que estigmatiza a “la otredad”. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022)

**Expresión de género.**— Es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. (CONAPRED, 2008)

**Gay.**—Personas del sexo biológico/ género masculino y femenino que sienten atracciones afectivas o sexuales por personas de su mismo sexo, hombres atraídos por otros hombres, mujeres atraídas por otras mujeres (Lambda Legal, s.f.)

**Heteronormatividad.**—Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas “normales, naturales e ideales” y se prefieren antes que las relaciones del mismo sexo o género. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

**Homofobia.**—Temor, odio o aversión irracional hacia las personas lesbianas, gay o bisexuales e inclusive, en términos globales, hacia las personas LGBTTTIQ+ en general. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017).

**Identidad de género.**—Vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente. Esta identidad puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer e incluye tanto la vivencia personal del cuerpo como otras expresiones de género. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

**Intersexual.**—Persona que nace con una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera “masculino” o “femenino”. Puede tener características combinadas tanto masculinas como femeninas (Fomperosa, 2021).

**Lesbiana.**—Persona con sexo biológico/género femenino que es atraída emocional, afectiva y sexualmente de manera perdurable por otras personas del mismo sexo, es decir, por otras mujeres. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017)

**Machismo.**—El machismo es un término de uso social y académico que engloba al conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y preservan la estructura de dominio masculino y hetero normado sobre la sexualidad, la procreación, el trabajo y los afectos. (Instituto Nacional de las Mujeres, [s.f.])

**Misoginia.**—La palabra misoginia proviene de dos voces griegas *miso* y *gyne* que significan detestar a *la mujer*. Se usa para referirse a creencias o expresiones emocionales, psicológicas e ideológicas de odio hacia las mujeres y a lo femenino. (Instituto Nacional de las Mujeres, [s.f.])

**Orientación sexual.**—La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011)

**Sexismo.**—Conjunto de prácticas discriminatorias que existen tanto en conductas como en pensamientos, basadas en creencias en torno al sexo y el género de las personas. (Instituto Nacional de las Mujeres, s.f.)

**Trans.**—Son aquellas personas cuya identidad o expresión de género difiere de aquella que se adjudica típicamente al sexo que se les asignó al nacer. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022). En esta categoría se incluyen a las personas transgénero, transexuales y travestis.

## **X. Lista de fuentes**

ALDARTE, CENTRO DE ATENCIÓN A GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES (2010), *Estudio sobre Violencia Intragenero*, Aldarte, Append Investigación de Mercados, consultado el 15 de octubre de 2023, disponible en: <https://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/informeencuestaviolenciaintragenero.pdf>

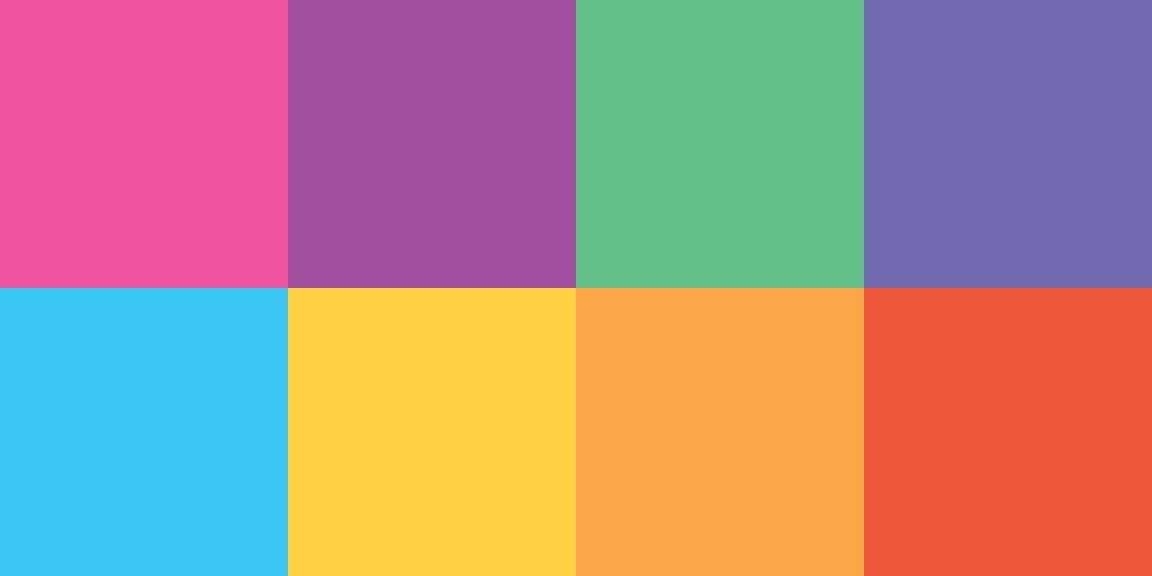
ALDARTE, CENTRO DE ATENCIÓN A GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES (2012). *Por los buenos tratos en las relaciones lésbicas y homosexuales. Informe para la inclusión de la perspectiva LGTB en los planteamientos sobre violencia de género: propuestas para el debate*. Consultado el 11 de octubre de 2023, disponible en <https://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/buenostratos.pdf>

ALISES, C. (2021). *Violencia intragenero, Guía práctica de atención a las*

- víctimas. Ed. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad. Consultado el 15 de octubre de 2023, disponible en <https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/80338.html>
- BRITO, A. (DIRECTOR). (2023). *Los rastros de la violencia por prejuicio: violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México, 2022*, Ed. Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., consultado el 04 de octubre, disponible en: <https://letraese.org.mx/wp-content/uploads/2023/05/Informe-crimenes-2022.pdf>
- CARO, F. Y SIMONETTO, P. (2019), *Sexualidades radicales: los Movimientos de Liberación Homosexual en América Latina (1967-1989)*, Izquierdas, 46, págs. 65-85, consultado el 07 de octubre de 2023, disponible en <https://cyberleninka.ru/article/n/sexualidades-radicales-los-movimientos-de-liberaci-n-homosexual-en-am-rica-latina-1967-1989>
- COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (2018). *Los Derechos Humanos de los hombres homosexuales, ante el VIH*. Consultado el 08 de octubre de 2023, disponible en [https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/37\\_DDHH-hombres-homosexuales.pdf](https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/37_DDHH-hombres-homosexuales.pdf)
- CONAPRED (2008), *El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol*, núm. 4. Ed. Arturo Cosme Valadez, Consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en [https://www.conapred.org.mx/documentos\\_cedoc/Derecho%20No%20discriminacion%20identidad%20%20sexogenerica.pdf](https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Derecho%20No%20discriminacion%20identidad%20%20sexogenerica.pdf)
- CONGRESO DE LA UNIÓN (2017). Ley de Sociedad de Convivencia para la Ciudad de México, consultada el 14 de octubre de 2023, disponible en [https://congresocdmx.gob.mx/archivos/transparencia/LEY\\_DE\\_SOCIEDAD\\_DE\\_CONVIVENCIA\\_PARA\\_LA\\_CIUADAD\\_DE\\_MEXICO.pdf](https://congresocdmx.gob.mx/archivos/transparencia/LEY_DE_SOCIEDAD_DE_CONVIVENCIA_PARA_LA_CIUADAD_DE_MEXICO.pdf)
- CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS (2020). *Informe sobre terapias de conversión*. Consultado el 15 de octubre de 2023, disponible en [https://www.ohchr.org/sites/default/files/ConversionTherapyReport\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/ConversionTherapyReport_SP.pdf)
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2015), Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, Doc. 36, consultado el 15 de octubre de 2023, disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf>
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2017). *Opinión Consultiva OC-24/17*, párr. 65, incisos q), consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_24\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf)
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2019) Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N.º 14: *Igualdad y No Discriminación*, pág. 22, consultado el 14 de octubre

- de 2023, disponible en <https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo14.pdf>
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2021). *“Vicky Hernández y otras Vs. Honduras”*, Consultada el 15 de octubre de 2023, disponible en [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_422\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf)
- FUNDACIÓN IGUALES (2012). *La homosexualidad nunca debió haber sido incluida en las clasificaciones internacionales de las enfermedades*, Comité Científico de la Fundación Iguales, consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en: <https://iguales.cl/la-homosexualidad-nunca-debio-haber-sido-incluida-en-las-clasificaciones-internacionales-de-las-enfermedades/>
- GOBIERNO DE MÉXICO (2015). *Combate a la violencia y discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, prácticas del Estado mexicano*. Consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/Res\\_27\\_32/Mexico.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/Res_27_32/Mexico.pdf)
- HUACUZ, F., (2023), *La primera marcha del orgullo LGBT en México. Crónica*. Consultado el 16 de octubre de 2023 disponible en <https://www.cronica.com.mx/cultura/primer-marcha-orgullo-lgbt-mexico.html>
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (2022). *Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021*, Comunicado de Prensa Núm. 340/22. Consultado el 04 de octubre de 2023, disponible en: [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endiseg/Resul\\_Endiseg21.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endiseg/Resul_Endiseg21.pdf)
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (S.f.), *Glosario para la Igualdad*, consultado el 14 octubre de 2023, disponible en: <https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/sexismo#:~:text=El%20sexismo%20se%20refiere%20al,e%20g%C3%A9nero%20de%20las%20personas>
- JUÁREZ, A. (2011) *Ver para existir: homofobia e impunidad en México, Opinión y debate*, Número 11–noviembre 2011, consultado el 04 de octubre 2023, disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27473.pdf>
- LAMBDA LEGAL, ABOGANDO POR LA IGUALDAD (S.f.) *Conceptos Básicos sobre ser Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual o Transgénero (Lgbtt, Por Sus Siglas)*, consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en <https://legacy.lambdalegal.org/es/known-your-rights/article/jovenes-conceptos>
- MARTÍNEZ, C. (2018). *El Movimiento de Liberación Homosexual en México. Parte I: Antecedentes y surgimiento. Movimientos e instituciones*. Consultado el 04 de octubre de 2023, disponible en: <https://movin.laoms.org/2018/06/18/movimiento-liberacion-homosexual-mexico-i/>
- MONSIVÁIS, C. (2011), *“No sin nosotros” Los días del terremoto 1985-2005*, Coedición: Consejo Nacional para la cultura y las artes.

- NAVARRETE, C. (2023), Proponen crear fiscalía especializada en delitos contra comunidad LGBT, *RTV Radiotelevisión de Veracruz*. Contenido obtenido de: <https://www.masnoticias.mx/proponen-crear-fiscalia-especializada-en-delitos-contra-comunidad-lgbt/>
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2011), *Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género*, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consultado el 11 de octubre de 2023, disponible en: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41\\_Spanish.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_Spanish.pdf)
- PEREIRA MORATÓ, R., LÓPEZ FERNÁNDEZ, D., & CAMPUZANO TERRAZAS, J. (2017). *Violencia de Género Bi-Direccional: Resultados Preliminares de Investigación*. *Temas Sociales*, (40), 115-138. Consultado el 15 de octubre de 2023, disponible en [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0040-29152017000100005&lng=es&tng=es](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152017000100005&lng=es&tng=es)
- PUGGELLI, A. (2016). *Violencia doméstica (intragénero)*, COGAM, Consultada el 14 de octubre de 2023, disponible en: <https://cogam.es/violencia-domestica-intragenero/>
- ROSMERLIN, S. (2006). *La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esbozo de una tipología*, Derechos Humanos y Políticas Públicas, consultado el 15 de octubre de 2023. Disponible en <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39780.pdf>.
- SECRETARÍA DE CULTURA (2019). *Breve historia de la primera marcha LGBT+ de México*, Secretaría de Cultura, Gobierno de México, consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en: <https://www.gob.mx/cultura/articulos/breve-historia-de-la-primera-marcha-lgbt+de-mexico>
- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (2019) Amparo en revisión 852/2017, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández, 8 de mayo de 2019, pág. 41. Consultado el 15 de octubre de 2023, disponible en [https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento\\_dos/2019-04/AR-852-2017-190430.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-04/AR-852-2017-190430.pdf)
- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (2022), Protocolo para Juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales, pág. 48, consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-09/Protocolo%20OSIEGCS%20digital%2012sep22.pdf>
- VOCES FEMINISTAS (2019). *El 3 de julio de 1955 en México las mujeres votan por primera vez durante las elecciones federales*. Consultado el 14 de octubre de 2023, disponible en: <https://vocesfeministas.mx/3-de-julio-de-1955-en-mexico-las-mujeres-votan-por-primera-vez-durante-las-elecciones-federales/>



# **PENSIÓN COMPENSATORIA EN LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ SUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ**

---

**Lizbeth Hernández Ribbón**

**Paola Fabiola Cuellar Gutiérrez**

**Saul Cortes Viveros**

## CAPÍTULO II

### PENSIÓN COMPENSATORIA EN LA POBLACIÓN LGBTTTTIQ+ SUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Lizbeth Hernández Ribbón\*  
Paola Fabiola Cuellar Gutiérrez\*\*  
Saul Cortes Viveros\*\*\*

**SUMARIO:** I. Introducción; II. Contexto histórico de la población LGBTTTTIQ+; III. Marco legal de protección a los Derechos Humanos de la población LGBTTTTIQ+; IV. Protección de derechos LGBTTTTIQ+ del Estado mexicano; V. Obligaciones del Estado mexicano a favor de las personas pertenecientes a la población LGBTTTTIQ+; VI. El matrimonio igualitario en México; VII. La figura de la pensión compensatoria; VIII. Análisis de la aplicación del Artículo 252 del Código Civil para el Estado de Veracruz; IX. Conclusiones; X. Lista de fuentes.

#### I. Introducción

Los matrimonios de personas pertenecientes a la población LGBTTTTIQ+ son parte de la realidad en nuestro país. El devenir histórico y la universalidad de los Derechos Humanos han demostrado que las dinámicas sociales son cambiantes; por tanto, el marco jurídico debe adaptarse a la actualidad. Uno de los principales problemas que enfrentan está relacionado con el reconocimiento de la figura denominada “pensión compensatoria” en divorcios de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTTIQ+.

Esta figura jurídica surgió con el objetivo de compensar al cónyuge que, durante el matrimonio, se vio imposibilitado de proporcionarse los medios necesarios para su subsistencia y que al término de la relación familiar existente se encuentra en estado de desequilibrio económico. Esto puede deberse al rol que asumió al dedicarse a las labores del hogar o, en su caso, al cuidado de los hijos, generándole un costo de oportunidad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria es que, derivado de las circunstancias

---

\*Alumna de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, sede Xalapa del Sistema de Enseñanza Abierta, correo institucional: zs22000348@estudiantes.uv.mx

\*\*Alumna del Doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Profesor invitado de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, sede Xalapa, correo institucional: pcuellar@uv.mx

\*\*\*Coordinador del Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, correo institucional: saulcortes@uv.mx

particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a alguno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes y, consecuentemente, le impida acceder a un nivel de vida adecuado (Sentencia recaída en el amparo en revisión 269/2014, 22 de octubre de 2014, Primera Sala, Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea). Sanciñena Asurmendi y otros (2021) mencionan que se trata de compensar el desequilibrio económico que se produce en uno de los cónyuges a causa de la separación o el divorcio; no es, por tanto, una pensión alimenticia, ni tiene carácter indemnizatorio. Sin embargo, su aplicación suele estar limitada a las dinámicas existentes en matrimonios heterosexuales.

Esta figura se encuentra prevista en el Artículo 252 del Código Civil para el Estado de Veracruz, donde la terminología empleada no es precisa al señalar si se actualiza en matrimonios igualitarios y tampoco los supuestos que deben cubrirse en tales casos. Por tal razón, este capítulo tiene como objetivo proponer algunas bases que deben ser atendidas al momento de decretar la pensión compensatoria en el matrimonio igualitario en el Estado de Veracruz, estableciendo supuestos objetivos y libres de discriminación; y considerando factores como la duración del matrimonio, la contribución financiera y el estándar de vida durante la relación. Para lograrlo, el método de investigación empleado se traduce en un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional relacionado con los derechos de las personas LGBTTTIQ+, así como un estudio de casos y decisiones judiciales relevantes. La pregunta de investigación, por lo tanto, es *cómo se puede garantizar la igualdad de derechos en el reconocimiento de la pensión compensatoria para las parejas del mismo sexo, asegurando una aplicación justa y equitativa de la normativa legal vigente, sin distinción de orientación sexual*.

## **II. Contexto histórico de la población LGBTTTIQ+**

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, asexuales, pansexuales, queer y otras identidades y orientaciones disidentes (que se agrupan bajo el acrónimo LGBTTTIQ+ y bajo el mismo se citarán en este trabajo) han atravesado diferentes luchas por el reconocimiento de sus derechos. Sus orígenes parten de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las primeras organizaciones y activistas comenzaron a abogar por la igualdad y el respeto de las personas homosexuales y transgénero.

En la década de 1920, surgieron algunas de las primeras organizaciones y activistas LGBTTTIQ+. En 1924, la Sociedad Científica Humanitaria fue fundada en Berlín por el pionero en derechos homosexuales, Magnus

Hirschfeld. Esta fue una de las primeras organizaciones en luchar por la igualdad y la despenalización de la homosexualidad.

Sin embargo, fue en las décadas de 1960 y 1970 cuando el movimiento comenzó a tomar una forma más organizada y visible. Uno de los momentos más importantes fue la llamada “Revuelta de Stonewall” en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York. En esta, ocurrió una redada policial en el bar Stonewall Inn, frecuentado por personas de la comunidad LGBTTTTIQ+. Esta redada provocó una serie de protestas y disturbios que duraron varios días ante los tratos policiales y las estrictas leyes en contra de las personas homosexuales.

Otro fenómeno fundamental en la lucha de la comunidad LGBTTTTIQ+ fue en la década de 1980 con la crisis del VIH/SIDA. Aunque la enfermedad generó estigma, también condujo a un aumento en la conciencia pública y la solidaridad en la lucha por los derechos LGBTTTTIQ+.

Los contextos históricos, sociales y políticos de cada país han hecho que la lucha política de la diversidad sexual tenga sus propias narrativas, tal es el caso de México, donde el primer arribo de la homosexualidad a la mirada pública mediática fue en 1901 con la aprehensión de 41 hombres homosexuales en una casa ubicada en la Ciudad de México. La mitad de los participantes vestía ropas consideradas culturalmente propias de las mujeres. Se cuenta que entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, quien fue exento de ser apresado. Los 41 hombres restantes fueron detenidos.

Algunas de las primeras organizaciones civiles de personas LGBTTTTIQ+ que surgieron en México y en las cuales se germinó el movimiento de liberación homosexual son: SEXPOL, un grupo creado por el activista Antonio Cué en 1975 y dedicado a los estudios en torno a la sexualidad y la política; para 1978 surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el cual basaba su trabajo en la disidencia y su apartidismo político y que tenía entre sus filas a activistas como Juan Jacobo Hernández.

Algunos grupos conformados por mujeres lesbianas fueron Ákratas (1975), Lesbos (1977) y Oikabeth (1978), considerada la primera organización pública de mujeres lesbianas. Los dos últimos grupos fueron formados por la activista lesbofeminista Yan María Yaoyótl Castro. Finalmente, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual tenía una posición feminista, nació en 1978 y fue fundado por la escritora Claudia Hinojosa. Cada una de estas agrupaciones mantuvo discusiones sobre el contexto político en el país y fraguó estrategias para su labor militante que tenía por meta visibilizar y desestigmatizar a las personas homosexuales; además de estos objetivos, las agrupaciones de mujeres lesbianas tenían en su agenda la liberación de la mujer y la lucha contra el patriarcado.

El 2 de octubre de 1978, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth participaron en un contingente en la marcha conmemorativa de los 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968. Un año después de la conglomeración de 1978, que apenas se conformó por algunas decenas de personas, se realizó la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México (1979) y 40 años después sería conocida como Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México, “Orgullo 41: Ser es resistir”.

De la anterior narrativa se observa que la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ ha sido ardua, se enfoca en la visibilización como grupo y la exigencia por la igualdad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos. Es por ello que el marco jurídico ha evolucionado paulatinamente ante las demandas políticas y sociales de cada época; de esta forma se han valido de los diferentes instrumentos normativos disponibles para exigir dignidad y respeto por sus Derechos Humanos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) también ha señalado que en un contexto de Derechos Humanos, los miembros del colectivo LGBTTTIQ+ se enfrentan a diversos desafíos, algunos comunes a todos y otros de carácter específico a cada grupo. En especial atención, uno de los derechos civiles que se negaban a la comunidad LGBTTTIQ+ era el contraer matrimonio y por ende, formar una familia; así como aquellos que se desprenden de la figura del matrimonio. Se negaba tal derecho ante la omisión legislativa de limitar el matrimonio a parejas heterosexuales refiriendo que el matrimonio era “la unión de un hombre y una mujer”.

A partir de 2006 diversas legislaciones locales comenzaron a reconocer a las parejas del mismo sexo bajo la figura de “sociedad de convivencia” aunque esto no permitía que las parejas gozaran de los derechos que vienen aparejados con el matrimonio y fue hasta 2009 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal estableciendo que el matrimonio será la “unión libre entre dos personas”.

Lo anterior, ha permitido que las parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio solo en el entonces Distrito Federal, aunque gradualmente los demás Estados de la República reconocieran el derecho ante la presión social para lograr contraer matrimonio y formar una familia. Nos encontrábamos, ante dos escenarios, uno, en el que en ciertas zonas de México las personas podían ejercer sus derechos sin mediaciones o restricciones, mientras que en el otro, en la mayoría del país, la población LGBTTTIQ+ se vio obligada a ejercer sus derechos mediante demandas

judiciales. En muchas ocasiones los amparos implican trámites lentos (que pueden durar más de un año), la evaluación de las autoridades caso por caso y, en no pocas ocasiones, la reticencia de las autoridades para su cumplimiento.

A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Atala Riffo y niñas Vs. Chile* de 24 de febrero de 2012, Serie C No. 239 reconoció que un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Ello violaría el Artículo 1.1. de la Convención Americana. El instrumento interamericano proscribía la discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también señaló que constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo "tradicional" de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio (Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N.º 14: Igualdad Y No Discriminación pp. 49).

Pese a lo anterior, en México, aún faltan entidades federativas donde es necesario hacer modificaciones a la ley, ya que las personas pueden acceder al matrimonio igualitario pero no se encuentra establecido en los Códigos Civiles de los Estados; ejemplo de ello, son los Estados de Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Chiapas y Nuevo León. Luego entonces, el hecho de que los derechos no se encuentren formalmente reconocidos en las leyes estatales, implica un trato desigual para los ciudadanos y las ciudadanas al interior del país (López, 2017, p.79).

A la par del reconocimiento del matrimonio igualitario derivan otros derechos inherentes a la figura; tales como la seguridad social, el derecho a una pensión alimenticia, el derecho a heredar, a ser tutor de tu pareja en situaciones específicas. De igual forma, ante la posibilidad de contraer matrimonio proviene el supuesto de divorciarse que a su vez genera derechos y obligaciones; tales como la pensión compensatoria y figuras más novedosas, la pensión patrimonial.

Ante el reconocimiento por parte de la legislación, deja legalmente protegidas a las personas; pero aun así, materialmente nos encontramos ineludiblemente con la apreciación de los hechos y la etapa de valoración judicial de cada caso concreto y es posible que en la emisión de sentencias se puedan ver mermados derechos ante la discriminación y la no protección a la igualdad.

### **III. Marco legal de protección a los Derechos Humanos de la población LGBTTTIQ+**

El marco de protección de los Derechos Humanos es amplio a nivel internacional y nacional; en ellos no solo se incluyen tratados internacionales como Convenciones y Pactos, también encontramos Opiniones Consultivas, Recomendaciones y Sentencias emitidas por los Tribunales Internacionales.

El primer instrumento destacable es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana), la cual fue adoptada en la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos, celebrada en el mes de noviembre de 1969. Dicho documento entró en vigor el 18 de julio de 1978 al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Convención Americana incorpora un amplio catálogo de derechos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, protección de la honra. Muchos de los cuales fueron reconocidos de manera preexistente a cualquier otro instrumento jurídico. De manera particular contempla el derecho “hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación” (Artículo 17).

Otro tratado internacional es la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y con ella se positivizaron las demandas sociales por la protección de los Derechos Humanos. En su Artículo 1º señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Asimismo, señala que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De manera expresa señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Reconoce también el derecho a igual protección contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación. Este mismo instrumento en su Artículo 16 señala “los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.”

Otro de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual pertenece al Sistema Universal de protección de Derechos Humanos. Fue adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Se enfoca, como el mismo nombre lo indica, en los derechos civiles y políticos tales como el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación; derecho a la libertad y la seguridad personales; así como reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de Costa Rica, adoptó la opinión consultiva OC-24/17 de fecha 24 de noviembre de 2017, denominada “Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a parejas del mismo sexo”. En esta señaló que la definición de familia no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes, como los tíos, primos y abuelos, para enumerar solo algunos miembros posibles de la familia extensa, siempre que tengan lazos cercanos personales. También reconoció que una familia puede estar conformada por personas con diversas identidades de género y/orientación sexual. Todas estas modalidades requieren de protección por la sociedad y el Estado, pues la Convención no protege un modelo único o determinado de familia.

En la misma la opinión consultiva OC-24/17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la procreación no es una característica que defina las relaciones conyugales, puesto que afirmar lo contrario sería degradante para las parejas –casadas o no– que por cualquier motivo carecen de capacidad o de interés en procrear. Por último, en respuesta a la quinta pregunta del Estado de Costa Rica, en torno a si es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación, la respuesta de la Corte es que (Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 19: Derechos Humanos de las personas LGBTI / Corte Interamericana de Derechos Humanos. — San José, C.R. : Corte IDH, 2021, pp. 55):

Los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas

por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna.

#### **IV. Protección de derechos LGBTTTIQ+ del Estado mexicano**

En México, la historia reciente de los Derechos Humanos tiene su origen en el año 2000 con la firma de un programa de cooperación técnica entre el presidente Vicente Fox y Mary Robinson, entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde entonces, se han realizado diversos cambios y adecuaciones al sistema jurídico mexicano, siendo la más emblemática la reforma del 10 de junio de 2011. Con ella se llevó a cabo la transición de “garantías individuales” a “Derechos Humanos”; se amplió el catálogo de Derechos Humanos en la Constitución; se incorporó el principio pro-persona y la interpretación conforme; y se establecieron obligaciones para todas las autoridades en el cumplimiento de los Derechos Humanos.

Particularmente, el Artículo 1º de la Constitución es el que contempla el derecho a la igualdad y no discriminación. De manera específica, se señala que queda prohibida toda discriminación motivada por las “preferencias sexuales”. Aunque la reforma de 2011 no tuvo un enfoque particular en los derechos de las personas LGBTTTIQ+, sí tuvo repercusiones directas en el marco normativo y la exigencia de sus derechos, ya que sitúa a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. Así, incorporó la obligación de todas las autoridades de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos; incluyó la obligación de todas las autoridades, en el marco de sus competencias, de reconocer y aplicar los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos; incluyó el principio pro-persona, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona; así como la incorporación de diversos principios, como, por ejemplo, el principio de progresividad, el cual establece que la realización de los Derechos Humanos solo puede lograrse de manera paulatina, estableciendo un estándar mínimo para la protección de los derechos.

La reforma recién aludida tuvo repercusiones significativas dentro del sistema jurídico mexicano. Así encontramos que en 2011 también ocurrió la abrogación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal para ser promulgada la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal; y que traería como consecuencia la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la

Ciudad de México. Esta, de manera particular, se constituyó como una herramienta más a favor de la comunidad LGBTTTTIQ+ para abordar la problemática que representan la homofobia y la transfobia.

En la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal de 2011, quedó prohibida la discriminación por razón de identidad de género y expresión de rol de género, dando así una protección sin precedentes a la población trans, aunque solo se limitó a la Ciudad de México. Pese a todo ello, muchos de los avances específicos en términos de derechos LGBTTTTIQ+ en México se han producido a través de decisiones judiciales, reformas legislativas locales y la lucha de la sociedad civil en los años posteriores a esta reforma.

## **V. Obligaciones del Estado mexicano a favor de las personas pertenecientes a la población LGBTTTTIQ+**

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que, para amparar a los miembros del colectivo LGBTTTTIQ+ de la violencia y la discriminación, no es preciso dictar un nuevo conjunto de normas o leyes de Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación legal de preservar los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTTIQ+ y sus derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

En México, estas obligaciones cobran particular relevancia a partir del nuevo paradigma constitucional; desde la reforma de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen obligaciones específicas que deben ser atendidas. Como tales, están en el Artículo 1° de la Constitución Federal y pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- Obligaciones generales; y
- Obligaciones específicas

En las primeras de ellas encontramos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. En cuanto a las obligaciones específicas, tenemos las de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos.

Las autoridades deben ver a los Derechos Humanos como sinónimo de sensibilizar, conocer los distintos derechos y garantías, mejorar la satisfacción de los Derechos Humanos. Al respecto, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas encaminadas a lograr una cultura basada en Derechos Humanos a través de cambios en la conciencia pública (Salazar, 2014). Esto incluye el reconocimiento de la discriminación basada en orientación sexual o de identidad de género que sufren las personas de la comunidad LGBTTTTIQ+ y que, por tanto, el Estado mexicano debe adoptar medidas tendientes a concientizar y sensibilizar sobre las violencias que viven; con la finalidad de crear acciones que

permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad.

Con relación a la obligación de respetar los Derechos Humanos, debemos entender la abstención de realizar acciones u omisiones, no interferir o poner en peligro los Derechos Humanos establecidos en una ley. Se trata de la obligación más inmediata, pues además implica mantener el goce del derecho en el estado mínimo en que se encuentra. En el presente caso, la obligación de respetar los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ conlleva necesariamente a eliminar del marco jurídico todas aquellas normas y preceptos jurídicos basados en estereotipos. Además, esta obligación también hace referencia a la promoción de un ambiente inclusivo y de igualdad.

La obligación de proteger los Derechos Humanos es la de prevenir las violaciones a los derechos, reaccionar ante los riesgos reales e inminentes de violaciones a los mismos; para que esto sea posible deben existir aparatos preventivos y sistemas de exigibilidad de los derechos. La obligación de proteger impone al Estado el deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidas por las autoridades o por parte de algún particular (Salazar, 2014). En materia de derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer mecanismos efectivos de prevención y respuesta. Esto puede incluir la implementación de leyes y políticas públicas encaminadas a abolir la discriminación hacia este grupo. También implica la promoción de la educación y la sensibilización en la sociedad para reducir la estigmatización y mejorar la aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género.

Por último, la obligación de garantizar hace referencia a organizar todo el aparato gubernamental de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno desarrollo y ejercicio de los Derechos Humanos, posibilidad de realización y de reparación en caso de violaciones a los derechos de las personas; se refiere a que el Estado tiene que adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos (Salazar, 2014). El cumplimiento de esta obligación genérica está encaminado a proporcionar, facilitar o mejorar los medios para que las personas puedan ejercer sus derechos por sí mismas. Esto significa que el Estado debe crear un entorno en el cual todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan ejercer plenamente sus Derechos Humanos.

Estas obligaciones genéricas se encuentran establecidas de manera expresa en el Artículo 1° de la Constitución Federal, sin concretar en ninguna actividad específica, dejando a las autoridades en el ámbito de

su competencia para establecer las acciones que consideren pertinentes y proteger los Derechos Humanos. Para establecer tales acciones, las autoridades deben tomar en consideración no solo los derechos reconocidos en nuestro sistema jurídico mexicano, sino también los que se contemplan en tratados internacionales, en recomendaciones de Organizaciones Internacionales y las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proveyendo así de una gran variedad de herramientas que les permitan establecer actuaciones garantistas.

### ***Obligaciones específicas***

El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley. Estas obligaciones son conocidas como obligaciones específicas; y la primera de ellas supone que las autoridades deben asegurar las condiciones que inhiban las conductas violatorias de los Derechos Humanos (Salazar, 2014).

El deber de investigar implica que el Estado debe investigar de oficio las violaciones a Derechos Humanos; la cual debe ser seria, imparcial y efectiva (Salazar, 2014). Las obligaciones específicas de sancionar y de reparar imponen al Estado la responsabilidad de resarcir el daño sufrido por la violación de los derechos (Salazar, 2014).

En el contexto de la protección de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, estas obligaciones específicas adquieren una importancia significativa; pues implican que las autoridades deben tomar medidas concretas y trascendentales para evitar que las violaciones a sus Derechos Humanos ocurran y traigan consigo daños irreparables. Esto contribuye a crear un entorno en el cual todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libres de discriminación y violencia y ejercer plenamente sus Derechos Humanos.

## **VI. El matrimonio igualitario en México**

Actualmente es comprensible que la finalidad del matrimonio no es la procreación, ya que el avance jurisprudencial y legal nos ha llevado a entenderlo así (Sentencia recaída en la tesis 1ª./J.43/2015, 19 de junio de 2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán). Sin embargo, esto es resultado de distintos fenómenos jurídicos, producto de las demandas sociales de la comunidad LGBTTTIQ+. En algunas legislaciones de la República Mexicana existe la posibilidad del matrimonio, concubinato y adopción de niñas y niños por parte de parejas del mismo sexo. Sin embargo, no se encuentra regulado por todos los Estados en sus Códigos Civiles.

En varios Estados de la República es posible acceder a ello en virtud de los Acuerdos emitidos por el Poder Ejecutivo. Además, esta lucha ha atravesado diferentes momentos históricos que han permitido que los matrimonios igualitarios sean una realidad.

El 16 de noviembre de 2006 se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, la cual permitió por primera vez la unión civil de personas del mismo sexo. Esta ley permitía a las parejas, independientemente de su orientación sexual, inscribirse legalmente como una “sociedad de convivencia” y acceder a ciertos beneficios y derechos legales similares a los del matrimonio. Tal legislación marcó un paso importante en la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo en la Ciudad de México. Sin embargo, se promulgó a nivel local y no a nivel federal. Posteriormente, el 16 de mayo de 2007, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon (2006-2012), publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la declaratoria para establecer el 17 de mayo como el Día de Lucha Contra la Homofobia en el Distrito Federal. En esa legislación de Sociedades de Convivencia se estableció el derecho a heredar, a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima.

Esta ley también sentó las bases para que dos años más tarde, en diciembre de 2009, se reformaran diversas disposiciones del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para aprobar la celebración de los matrimonios homosexuales. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, estableciendo que el matrimonio será la “unión libre entre dos personas”, eliminando el precepto anterior que establecía que este era entre “un hombre y una mujer”. Hasta antes de esa fecha, y desde 2006, la legislación local reconocía a las parejas del mismo sexo la “sociedad de convivencia”. Fue así que en 2010 se celebraron en el Distrito Federal las primeras bodas entre personas del mismo sexo, las cuales tienen que ser reconocidas en todo el territorio mexicano.

La reforma de 2009 fue impugnada por el Procurador General de la República bajo el argumento de que dicha reforma contravenía el texto constitucional y que tampoco resultaba discriminatoria contra las parejas del mismo sexo. Fue mediante sentencia en la acción de Inconstitucionalidad 2/2010 del 16 de agosto de 2010 que se determinó que la ley era constitucional en virtud de que protege a la familia en las diversas formas en que se integre, incluida la formada por parejas homosexuales. Señaló que la concepción del matrimonio ha evolucionado con la sociedad y que ahora debe entenderse en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos.

El siguiente y más grande avance legal lo encontramos en 2015 cuando

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia 43/2015, titulada “MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL”. En esta jurisprudencia, la Primera Sala estableció que resulta erróneo pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación, ya que es discriminatorio. Esto excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están en condiciones similares a las parejas heterosexuales. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, ya sea por parte de autoridades estatales o particulares, puede disminuir o restringir los derechos de una persona debido a su orientación sexual. Por tanto, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho basándose en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o concordar un enunciado que es claramente excluyente.

Posteriormente, el Gobierno Federal presentó un paquete de reformas constitucionales al Congreso de la Unión en mayo de 2016, con las cuales buscaba la homogeneización del reconocimiento de los derechos LGBTTTIQ+ en todo el territorio (incluía la legalización del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la posibilidad de realizar cambios de sexo en los documentos de identidad y la promoción de la tolerancia a la diversidad sexual). La propuesta del ejecutivo buscaba reconocer, bajo el discurso de los Derechos Humanos, los fallos de la SCJN. Frente a esta propuesta, que cristalizaba las conquistas alcanzadas por los movimientos LGBTTTIQ+, las resistencias conservadoras fueron inmediatas. Grupos liderados por la iglesia católica coordinaron acciones, creando el Frente Nacional por la Familia (FNF), y finalmente, la reforma de la Ley fue archivada en el Legislativo (López, p. 79).

## **VII. La figura de la pensión compensatoria**

Esta figura surge de la imposibilidad de uno de los cónyuges de proveerse a sí mismo su manutención. Su finalidad es compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado de proporcionarse los medios necesarios para su subsistencia. Así se indicó en la tesis aislada CDXXXVII/2014, con número de registro digital 2008111 y rubro: “PENSIÓN COMPENSATORIA. SE ENCUENTRA SUJETA A LA IMPOSIBILIDAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES DE PROPORCIONARSE A SÍ MISMO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU SUBSISTENCIA Y

DEBE DURAR POR EL TIEMPO Estrictamente necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico entre la pareja”.

En esa ejecutoria, la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también reconoció que la pensión compensatoria debe durar el tiempo estrictamente necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico entre la pareja, para que el cónyuge acreedor se coloque en posición de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su subsistencia.

Sin embargo, también se reconoce que podrán existir determinadas situaciones extraordinarias en las que podrá decretarse una pensión compensatoria vitalicia a favor del cónyuge acreedor, en virtud de que por su edad, estado de salud o la propia duración del matrimonio le sea imposible obtener por sí solo los medios suficientes para su subsistencia.

La pensión compensatoria tiene una naturaleza distinta a la obligación alimentaria que surge de las relaciones de matrimonio, pues parte del desequilibrio económico que vivió uno de los cónyuges durante el matrimonio y no de la obligación propia del matrimonio; su objetivo es compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta que esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. Así lo reconoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada CCCLXXXVII/2014, con número de registro digital 2007988 y rubro: “PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO”. En términos de la Primera Sala, “en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio, esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de pensión compensatoria.”

La pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. La Primera Sala considera que el presupuesto

básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que, en última instancia, incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.

De forma más reciente, mediante la Tesis: VII.2o.C. J/14 C (10a.) con número de registro digital 2023590, se reconoció que el monto de la pensión compensatoria debe comprender el carácter resarcitorio y asistencial. En la misma se señaló al carácter resarcitorio como los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar; y a partir de ello se establecieron los supuestos que identificarse:

- Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio o concubinato, dedicarse uno de los cónyuges o concubinos a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y,
- Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos.

En cuanto al carácter asistencial, se dijo que debe identificarse: a) la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir; o, b) la insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

Por tanto, se concluyó que el monto de la pensión compensatoria debe comprender:

1. La aportación al cónyuge o concubino que benefició a la familia durante el tiempo de duración del matrimonio o concubinato.
2. El costo de oportunidad por asumir la carga doméstica y/o las necesidades para su subsistencia.
3. La precaria situación económica derivada de carecer de fuentes de ingresos o que éstos resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

### **VIII. Análisis de la aplicación del Artículo 252 del Código Civil para el Estado de Veracruz**

Mediante reforma al Artículo 252 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de

dicha entidad federativa el miércoles 10 de junio de 2020, se realizaron las adecuaciones normativas para contemplar la figura de la pensión compensatoria. El citado artículo señala: “La pensión compensatoria es un deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico que pueda presentarse entre los cónyuges o concubinos al momento de disolverse el vínculo correspondiente, al colocar a una de las partes en una situación de desventaja económica que incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y que le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. El órgano jurisdiccional que determine la pensión compensatoria deberá tomar en consideración la pensión alimenticia, en caso de que se otorguen ambas.”

De ello se desprende que existe un deber asistencial y resarcitorio que deriva del desequilibrio económico que pueda presentarse entre los cónyuges o concubinos al momento de disolverse el vínculo correspondiente; ya que existe una situación de desventaja económica que incide en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y que le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.

Por su parte, el Artículo 252 BIS señala las causas por las cuales se podrá otorgar la pensión compensatoria; siendo las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y los perjuicios derivados del costo de oportunidad que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica, o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos.

Lo anterior deja claro que la legislación local aplicable no hace distinción en la aplicación de los supuestos por razón del matrimonio que se disuelva; ya que solo hace falta la desventaja de desarrollo profesional en comparación a la pareja; siendo un matrimonio de diferente o igual sexo.

La norma es aplicable al supuesto de los roles de pareja que se desarrollen; si bien la naturaleza de la pensión compensatoria descansa en la violencia de género con respecto a las mujeres y la desigualdad de oportunidades ante los roles de género; esto no menoscaba la posibilidad de ser aplicable para las parejas del mismo sexo donde no se asimila a un rol de género sino a un rol de pareja en el que uno de los involucrados se encuentra en una situación de desventaja.

Por otra parte, el Artículo 252 TER del mismo ordenamiento legal es muy claro al enlistar las circunstancias que se tomarán en cuenta para

otorgar la pensión compensatoria; se insertan a la letra dichos puntos:

- I. Edad y estado de salud de los excónyuges y exconcubinos;
- II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;
- III. Duración del matrimonio o el concubinato y, dedicación pasada y futura a la familia y al hogar;
- IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del excónyuge o exconcubino;
- V. Medios económicos de uno y otro excónyuge o exconcubino, así como de sus necesidades;
- VI. Las obligaciones que tenga el deudor; y
- VII. La existencia de la doble jornada.

Dichas fracciones reflejan lo que el máximo tribunal en el Estado mexicano ha señalado como necesario considerar para otorgar la pensión compensatoria como un medio para que la persona en desventaja económica pueda mantener el estándar de vida que tenía al estar en pareja. Aunque no se desarrolle profesionalmente, las labores domésticas permiten a la persona que trabaja desarrollarse plenamente.

Es comprensible que la pensión debe otorgarse incluso cuando la persona trabaja pero realiza actividades de cuidado, cumpliendo con lo dispuesto por la fracción VII respecto a la doble jornada. Se reconoce que, si bien se realizan actividades laborales, el cuidado del hogar constituye otra jornada laboral por las implicaciones que conlleva.

Es evidente que el legislador no buscaba hacer distinción en la aplicación de los derechos a recibir una pensión compensatoria a un solo sector poblacional. Aunque en relaciones heterosexuales se recomienda considerar la desventaja histórica de las mujeres, esto no limita al juzgador a preservar el derecho y el carácter resarcitorio y asistencial para las personas que se dedican al cuidado del hogar, sin importar si se trata de un matrimonio del mismo sexo.

Se deben considerar diferentes circunstancias para determinar la duración de la pensión compensatoria. El juzgador debe realizar un análisis integral de todas las situaciones o condiciones particulares de la relación familiar para motivar suficientemente su decisión, evitando estereotipos o prejuicios de género.

La legislación local no buscaba hacer distinción en la aplicación de los derechos que surgen por la disolución de un vínculo matrimonial, sin importar si es una relación heterosexual o del mismo género, reconociendo el concepto de cónyuge para parejas conformadas por dos hombres o por dos mujeres.

Para el análisis de las circunstancias que se tomarán en cuenta para otorgar la pensión compensatoria, el juzgador debe apegarse a las circunstancias específicas del rol en las relaciones, sin hacer

pronunciamientos discriminatorios a los roles de género, que perpetúan las desventajas que viven las mujeres en el contexto social.

Los jueces del Estado de Veracruz no están imposibilitados para aplicar la normativa vigente relacionada con la pensión compensatoria derivada del matrimonio de personas del mismo sexo; donde la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir, a menos que sea un ajuste en pro de las personas.

Es claro que de no aplicarse lo concerniente a este derecho de quienes se dedican a las labores del hogar, pero que se encuentran en un matrimonio igualitario, sería discriminatorio, generando una distinción entre matrimonios de parejas heterosexuales y del mismo género bajo una categoría sospechosa, situación superada por la legislación vigente desde que se reconoció al matrimonio como la unión de dos personas.

Aunque la pensión compensatoria provenga de desventajas históricas enfrentadas por las mujeres en el matrimonio, el reconocimiento del derecho es para todos que se encuentren en el supuesto señalado por el Código vigente, aplicando la normativa sin distinción por preferencia sexual.

De lo anterior se puede tomar el criterio jurisprudencial “IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL,” señalando que la igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no solo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En este caso específico, las distinciones son vedadas; toda vez que la exclusión configuraría un estado de indefensión y discriminación y como consecuencia, atentaría en contra del principio de igualdad.

## **IX. Conclusiones**

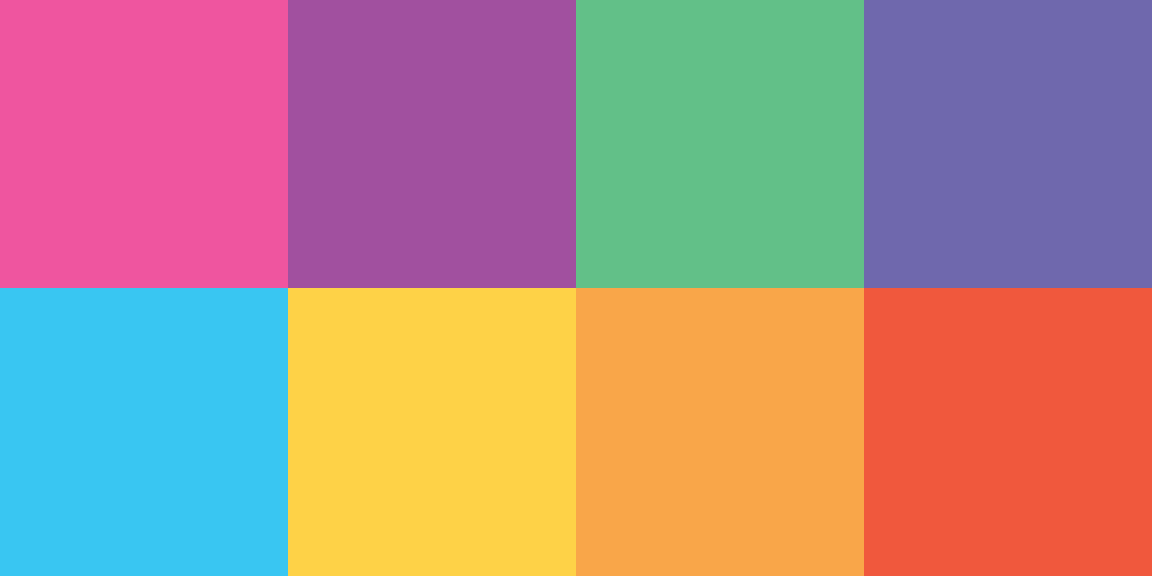
Los jueces especializados en materia familiar en el Estado de Veracruz deben aplicar la norma sin hacer distinciones, evitando emitir juicios de valor relacionados con ideas preconcebidas sobre lo que implica un rol de género. Deben reconocer que las relaciones de parejas del mismo sexo se desarrollan de manera similar a las parejas heterosexuales, pero al mismo tiempo, resguardando los derechos establecidos por la normativa vigente. Deben aplicar la misma normativa a los supuestos previstos y ajustarse a los hechos revelados en el procedimiento judicial

sin recurrir al estigma que propicia la discriminación y el menoscabo de los derechos de la población LGBTQ+.

El reconocimiento del matrimonio igualitario implica la aplicación de la norma en igual medida para todas las personas, sin distinción de tipos o clases de matrimonios. Por lo tanto, estos pueden disolverse bajo la normativa aplicable y el estudio del caso específico, de acuerdo con el Código Civil. Esto incluye las consecuencias inherentes al término del matrimonio, como la procedencia o no de una pensión compensatoria.

## **X. Lista de fuentes**

- CAMINO S, A. (2021) *Compensaciones e indemnizaciones en las relaciones familiares*. 1ª. Edición, Aranzadi, S. A. U.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (Pacto de San José de Costa. Rica, del 22 de Noviembre del 1969)
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2021). *Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 19 : Derechos Humanos de las personas LGBTI / Corte Interamericana de Derechos Humanos*. — San José, C.R. : Corte IDH, 2021.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2021). *Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N.º 14: Igualdad y No Discriminación*.
- GONZÁLEZ, M. (2017) Ciudadanía y Derechos Humanos. Por el reconocimiento del matrimonio igualitario en América Latina. En Sotelo, A. (Coord.) *El matrimonio igualitario desde el activismo, la academia y la justicia constitucional*. Centro de Estudios Constitucionales.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2017). *Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, OC-24/17*, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 24 Noviembre 2017, disponible en esta dirección: <https://www.refworld.org.es/docid/5a5d311f4.html>
- LÓPEZ, J. A. (2017). Los derechos LGBT en México: Acción colectiva a nivel subnacional. *European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Del Caribe*, 104, 69–88. <http://www.jstor.org/stable/90017760>
- LÓPEZ, M. (2018) *Diversidad sexual y Derechos Humanos*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1948) *Declaración Universal de Derechos Humanos*, 10 Diciembre 1948, 217 A (III), disponible en esta dirección: <https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html>
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1966) *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, de la Asamblea General, disponible en esta dirección: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr_SP.pdf)



# **PRECARIEDAD LABORAL DE LA COMUNIDAD TRANS EN MÉXICO: RUMBO A LA APROBACIÓN DE LA LEY DE CUPO MÍNIMO**

---

**María de Lourdes Castellanos Villalobos**

**Rebeca Castellanos Villalobos**

**Ernesto Levet Gorozpe**

### CAPÍTULO III

## PRECARIEDAD LABORAL DE LA COMUNIDAD TRANS EN MÉXICO: RUMBO A LA APROBACIÓN DE LA LEY DE CUPO MÍNIMO

María de Lourdes Castellanos Villalobos\*

Rebeca Castellanos Villalobos\*\*

Ernesto Levet Gorozpe\*\*\*

**SUMARIO:** I. Introducción; II. Breve evolución del trabajo y su regulación; III. La comunidad trans en México y la precariedad laboral; IV. Propuesta de Ley de Cupo Mínimo en el ámbito laboral; V. Conclusiones; VI. Lista de fuentes.

### I. Introducción

Uno de los problemas más relevantes que enfrentamos como país es la precariedad laboral, especialmente para quienes forman parte de la denominada comunidad trans (transexuales, transgénero y travestis). Esto requiere reorientar las políticas públicas en materia de empleo. A lo largo de los años, los miembros de dicha comunidad han enfrentado discriminación, violaciones sistemáticas de sus Derechos Humanos y, por ende, de su dignidad humana. Además, han enfrentado dificultades particulares en el ámbito laboral, lo que ha resultado en una marcada desigualdad económica y vulneración de su desarrollo integral y proyecto de vida.

Sin duda alguna, la precariedad laboral que enfrenta la comunidad trans en México es un problema grave, acentuado por los roles y estereotipos que como sociedad hemos impuesto a este grupo social. A pesar de los avances en la lucha por el reconocimiento de los Derechos

---

\*Candidata Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); Profesor de Tiempo Completo Titular C adscrita al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana (UV); Miembro del NAB de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional Región Veracruz. Representante de la Unidad de Género en el SEA y Coordinadora de la Academia de Derecho Internacional. Correo institucional: locastellanos@uv.mx. <https://orcid.org/0000-0002-6358-3413>

\*\*Profesora de asignatura de las Licenciaturas de Administración y de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana (UV) en la región Veracruz. Coordinadora del programa transversal de Responsabilidad Social en la misma dependencia. Correo institucional: recastellanos@uv.mx. <https://orcid.org/0000-0002-6085-5460>

\*\*\*Profesor de Tiempo Completo, Titular C adscrito al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana con Perfil Deseable PRODEP; Miembro del NAB de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional Región Veracruz. Coordinador de la Academia de Derecho Financiero y Fiscal. Responsable del Seguimiento a Egresados del PE de Derecho en Veracruz. Correo institucional: elevet@uv.mx. <https://orcid.org/0000-0002-8182-572X>

Humanos de los integrantes del grupo LGBTTTIQ+ en el país, las personas trans siguen enfrentando obstáculos significativos y la falta de oportunidades para tener un trabajo digno y decente.

Dicho lo anterior, una de las propuestas de los integrantes de esta comunidad para lograr el reconocimiento de sus Derechos Humanos laborales incluye la aprobación de una ley de cupo mínimo. Esta propuesta busca disminuir la precariedad laboral de personas del grupo trans al garantizar el acceso a empleos, tanto en el sector público como en el privado, mediante la reserva de un porcentaje mínimo de puestos de trabajo para personas integrantes de este grupo social.

La aprobación de una ley de cupo mínimo es un paso importante para abordar los desafíos que enfrentan cotidianamente las personas trans. Además, puede servir como catalizador para aumentar la conciencia sobre los derechos laborales de esta comunidad y fomentar un cambio cultural en el lugar de trabajo.

El capítulo analiza la problemática de la precariedad laboral que enfrenta la comunidad trans en México, destacando los desafíos y las consecuencias de esta situación en sus vidas. Para abordar esta problemática, se propone la aprobación de una ley de cupo mínimo que garantice el acceso a empleos dignos y decentes para las personas trans. Los objetivos de este enfoque incluyen la inclusión social, la reducción de la discriminación en el empleo y la visibilización de las personas trans en el ámbito laboral. El método de investigación empleado implica un análisis detallado de la situación laboral de la comunidad trans, así como un estudio de las leyes y políticas laborales existentes. Dicho lo anterior, las preguntas centrales de investigación son dos: a) ¿Cómo abordar la precariedad laboral que enfrentan las personas trans?; b) ¿Cómo promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, reconociendo los derechos humanos fundamentales de esta comunidad?

## **II. Breve evolución del trabajo y su regulación**

Cuando se habla del trabajo, se tiene la idea de que este es considerado como un castigo; dicha concepción deriva de algunas religiones y mitos de las culturas antiguas, como la leyenda griega de Prometeo y su condena en manos de los dioses. Esta historia se puede relacionar con el trabajo, la lucha por el conocimiento, el sufrimiento humano y el progreso.

Así pues, cuando Prometeo roba el fuego a los dioses, se traduce en el esfuerzo que conlleva adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo, pero también la lucha por los derechos (humanos) laborales y la búsqueda del reconocimiento a la igualdad y respeto de las personas.

Derivado del hurto, la pena consistía en que su hígado fuera devorado todos los días por un águila; el sufrimiento infligido puede compararse con las luchas y vicisitudes diarias que implica el trabajo y “el logro del progreso, innovación y avance de la civilización” (Carballo, 2022).

Otro relato que contribuyó a la percepción del trabajo como un castigo es el relato bíblico del Génesis 3:19 en la Biblia, que describe el castigo de Adán y Eva por desobedecer a Dios en el Jardín del Edén. Según la historia, Dios les dijo: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” (Biblia Online, s/f). En este pasaje se ha interpretado a lo largo de la historia el por qué el trabajo puede ser arduo y agotador. Se considera que el trabajo se convirtió en una necesidad para la supervivencia humana después de la caída de Adán y Eva, y se percibe como una especie de “sufrimiento” por su desobediencia.

La idea de que el trabajo era visto como un castigo se deriva en parte de interpretaciones religiosas y mitológicas que describen el trabajo arduo y la labor constante como consecuencia de la desobediencia o el conflicto con los dioses. Sin embargo, es importante destacar que esta percepción del trabajo no es universal y puede variar según las creencias y las tradiciones culturales. Así pues, el trabajo en la antigüedad variaba significativamente en cada civilización y no existían regulaciones laborales en el sentido moderno que conocemos hoy en día.

El trabajo en aquellas épocas estaba arraigado en las estructuras sociales, culturales y económicas de cada sociedad antigua, y se regía por normas y prácticas tradicionales. De forma enunciativa y general, mencionaremos algunos ejemplos (Castán Pérez-Gómez, 2021):

1. Mesopotamia: Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, que florecieron a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, se destacaron por el trabajo en la agricultura, una parte fundamental de su economía. La mano de obra estaba organizada en torno a la propiedad de la tierra. Los códigos legales, como el Código de Hammurabi en Babilonia, contenían disposiciones sobre las relaciones laborales y las compensaciones por el trabajo, pero estas leyes no eran necesariamente favorables para los trabajadores. Tanto hombres como mujeres trabajaban, y “como la antigua Mesopotamia era fundamentalmente una sociedad agraria, las principales ocupaciones eran el cultivo y la cría de ganado” (Bertman, 2003). Bertman también menciona otras ocupaciones, como escribas, curanderos, artesanos, tejedores, alfareros, pescadores, maestros y sacerdotes o sacerdotisas. Con el reconocimiento de los ejércitos permanentes, los soldados y sus oficiales ocuparon un lugar importante en la fuerza laboral de Mesopotamia.

2. Egipto: Para ellos, la mano de obra era esencial para la construcción de monumentos, pirámides y proyectos de irrigación. La sociedad estaba fuertemente estratificada, con trabajadores agrícolas, artesanos y esclavos. La regulación del trabajo estaba en manos de los gobernantes y sacerdotes, y las condiciones de trabajo variaban según la posición social. Los trabajadores estaban sujetos a jerarquías laborales y a menudo trabajaban en proyectos estatales obligatorios. Alonso Royano (2008) sugiere que en los primeros tiempos, la prestación del trabajo era obligatoria a través de la requisita o recluta, y como contraprestación, se ofrecía un salario en especie consistente en alimentación, vestido y cobijo
3. Grecia: En la época antigua, la mayoría de la mano de obra estaba compuesta por ciudadanos libres que trabajaban en una variedad de ocupaciones, incluyendo agricultura, artesanía y comercio. Dentro de la sociedad griega, había una mayor cantidad de obreros que de esclavos. Según Cartwright (2018), estos eran trabajadores semilibres, totalmente dependientes de sus patronos, como la clase de los ilotas de Esparta. La regulación laboral se basaba en las leyes de la ciudad-Estado y las normas sociales. Aunque los trabajadores tenían ciertos derechos, estos estaban limitados en comparación con las normas laborales modernas.
4. Antigua Roma: En el Imperio Romano, había una distinción clara entre ciudadanos romanos libres y esclavos. Los ciudadanos libres tenían derechos laborales, incluyendo la posibilidad de firmar contratos de trabajo y buscar protección legal en casos de explotación. Sin embargo, los esclavos carecían de derechos laborales y estaban sujetos a la voluntad de sus amos. Castán Pérez-Gómez (2021) destaca que, de todas las ocupaciones del Mundo Antiguo, en Roma la agricultura fue siempre considerada la más digna y provechosa.

En general, podemos señalar que el trabajo estaba fuertemente influenciado por las normas culturales y las estructuras de poder de cada sociedad antigua. Existían pocas regulaciones laborales, centrándose primordialmente en la preservación de la estructura social y económica de la época, lo que implicaba condiciones laborales profundamente difíciles y desiguales. En ese sentido, los derechos laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva y las normas protectoras del trabajo, que consideramos fundamentales actualmente, eran inexistentes en ese entonces.

Sin embargo, a manera de ejemplo, podemos mencionar algunos ordenamientos relacionados con el trabajo en aquella época. Por

ejemplo, las leyes de Ur-Nammu en Mesopotamia incluían disposiciones relacionadas con el trabajo y la remuneración de los trabajadores, como reglas sobre los salarios y la responsabilidad de los empleadores por lesiones en el trabajo (Noah Kramer, 1956). En el Código de Hammurabi también encontramos algunas regulaciones laborales, entre las que destacan las tarifas para el trabajo de diferentes tipos de artesanos y reglas sobre el salario mínimo, aunque estos conceptos eran muy diferentes a los de la época moderna. Hammurabi controló su imperio mediante este ordenamiento, dejando claro en el prólogo de su código que son leyes divinas y que su único interés al administrarlas es el bien común (Mark, 2021).

Por otra parte, en el Antiguo Egipto, se establecieron algunas leyes que regulaban las relaciones laborales, especialmente en la construcción de monumentos y proyectos de irrigación. Los trabajadores a menudo eran compensados con alimentos, y se les proporcionaba vivienda y atención médica en algunos casos. Existían diversas formas de impartir justicia, siendo el faraón la figura más importante (Cordón I Solà-Sagalés, 2021).

En el caso del Imperio Romano, había una cierta regulación legal en lo que respecta al trabajo, especialmente para los ciudadanos romanos libres. Era bastante común la elaboración de contratos laborales, y las leyes regulaban aspectos como el salario y la duración del trabajo. En aquella época, se contaba con una clasificación en materia laboral, que incluía trabajos en el campo, artesanos, médicos, juristas, abogados, por mencionar algunos (Castán Pérez-Gómez, 2021). Se deben señalar diversos senadoconsultos, plebiscitos y leyes que regulaban dichas actividades. Sin embargo, estas regulaciones no eran tan exhaustivas como las leyes laborales modernas.

Establecidos de manera sucinta los orígenes del trabajo y su regulación en algunas de las civilizaciones más emblemáticas de la antigüedad, es menester señalar que las primeras regulaciones del derecho laboral, en estricto sentido, se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX debido al nuevo paradigma social que trajo consigo la Revolución Industrial, como el hacinamiento, el trabajo inhumano, la precariedad laboral, las enfermedades, entre otras.

Estas normativas laborales nacen con la finalidad de establecer un equilibrio entre las prerrogativas de la parte obrera y las necesidades de los patrones (empleadores). Dichos ordenamientos pusieron los cimientos de las leyes laborales contemporáneas y han evolucionado hasta el día de hoy.

A continuación, se destacan algunas de las regulaciones pioneras en el derecho laboral en Europa, Asia y Estados Unidos:

**Tabla 1. Breves apuntes de la evolución Derecho del Trabajo**

Ordenamiento	Año	Contenido
Ley de Salud y Morosidad de Aprendices	1802 (Reino Unido)	Abordó las condiciones de trabajo en las fábricas y estableció regulaciones sobre las horas de trabajo y el trabajo de los aprendices en las fábricas de algodón y lino. Esta ley tenía limitaciones significativas, ya que no aplicaba a los trabajadores adultos.
Ley de Fabricas	1831 (Reino Unido)	Este ordenamiento intento ampliar las regulaciones de la Ley de 1802. Estableció un sistema de inspección de fábricas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y amplió las restricciones de horas de trabajo para mujeres y niños en las fábricas. Su alcance seguía siendo limitado y la aplicación era inconsistente.
Ley de Regulación del Trabajo de Fábrica	1833 (Reino Unido)	Representó un avance significativo en la regulación laboral. Estableció límites más estrictos en las horas de trabajo para mujeres y niños en las fábricas, y disposiciones para el empleo de inspectores para hacer cumplir estas regulaciones. Introdujo la idea de que los niños de ciertas edades debían recibir al menos dos horas de educación diaria.
Ley del Trabajo Infantil	1836 (EUA)	Massachusetts aprobó la primera ley de trabajo infantil en 1836, limitando las horas de trabajo para niños. Esto marcó el comienzo de la regulación laboral en el país y sentó las bases para futuras leyes laborales.
Ley de Fábricas	1844 (Reino Unido)	Esta ley amplió las regulaciones laborales en el Reino Unido, estableció una jornada laboral máxima para las mujeres y los niños en las fábricas textiles. Extendió las regulaciones laborales a las fábricas de cerámica y otras industrias; dispuso la jornada laboral máxima de 12 horas para las mujeres y los jóvenes.
Ley de las Diez Horas	1847 (Reino Unido)	Establecía regulaciones sobre las horas de trabajo y las condiciones de trabajo para niños y jóvenes en las fábricas textiles. Limitó aún más las horas de trabajo para mujeres y niños en las fábricas. Instauró la figura de los inspectores de fábrica.

Ley de Fábricas	1847 (Francia)	Estableció ciertos estándares de seguridad y promulgó leyes similares a las del Reino Unido para regular las condiciones de trabajo en las fábricas, limitando las horas de trabajo para mujeres y niños.
Ley de Fábricas	1874 (EUA)	Nuevamente a nivel estatal, Massachusetts fue uno de los primeros estados en promulgar leyes que limitaban las horas de trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas. Estas leyes inspiraron legislación similar en otros estados de EE. UU.
Ley de Regulación del Trabajo	1891 (Alemania)	Conocida como "Ley de Bismarck", estableció regulaciones laborales en el naciente Imperio Alemán. Fue una de las primeras leyes que introdujo la seguridad social, incluyendo seguros de enfermedad y jubilación.
Leyes laborales	1894 (Nueva Zelanda)	Este país fue pionero en la promulgación de leyes laborales; incluyó la regulación de las horas de trabajo, las condiciones laborales y la creación de un sistema de compensación por accidentes de trabajo.
Ley de Accidentes de trabajo	1900 (España)	Este ordenamiento contenía las primeras definiciones de accidente de trabajo de operarios y del término empleador
Ley de Contratos del Trabajo	1906 (Reino Unido)	Estableció el principio de compensación por lesiones laborales y enfermedades ocupacionales.
Ley de Compensación Laboral	1908 (Alemania)	Fue un importante hito en la protección de los trabajadores contra lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Estableciendo un sistema de compensación por lesiones de los trabajadores.
Ley de Horas de Trabajo	1912 (EUA)	La huelga de las fábricas textiles de Lawrence, Massachusetts, en 1912, condujo a la aprobación de leyes de jornada laboral de 54 horas semanales.
Tratado de Versalles	1919	Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles incluyó disposiciones relacionadas con las condiciones laborales y estableció la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como un ente especializado de las Naciones Unidas, que desempeña un papel importante en la promoción de normas laborales a nivel internacional.

Ley de Salarios Mínimos y Máximos	1938 (EUA)	Estableció estándares para el salario mínimo, las horas de trabajo y el pago de horas extras. Tuvo un impacto significativo en la regulación laboral en los EE. UU.
Ley de Fabricas	1948 (India)	Este ordenamiento ha sido reformado, originalmente prohibía el trabajo en máquinas en movimiento, de procesado de algodón o peligrosas a los niños o adolescentes, así como la necesidad de regular cuales eran los pesos que podían cargar los menores de edad.

Fuente; elaboración Propia con datos de Páramo Montero & Bueno Pareja (2018) y Pérez Varela (2006)

A medida que las sociedades industriales evolucionaban, surgieron más regulaciones y leyes laborales para abordar cuestiones como los salarios, la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales justas y la negociación colectiva, dando lugar a sistemas legales más completos y equitativos para proteger los derechos de los trabajadores.

### III. La comunidad trans en México y la precariedad laboral

La precariedad laboral, como fenómeno social (íntimamente ligado a la falta de seguridad en el trabajo y a condiciones justas), es una problemática que afecta a numerosos grupos en situación de vulnerabilidad, siendo uno de ellos los integrantes de la “comunidad trans”. En todo el mundo, las personas trans enfrentan desafíos únicos y a menudo desgarradores en el ámbito laboral, lo que resulta en una marcada desigualdad económica.

Ahora bien, una de las cuestiones que se analizará es la precariedad laboral que sufren quienes integran a dicha comunidad, destacando algunos de los desafíos más comunes que enfrentan, así como las consecuencias profundas que esto puede tener en sus vidas.

Dentro de la comunidad LGBTTTIQ+ se encuentran las personas transexuales, transgénero y travestis, cuya identidad de género difiere de aquella que se les asignó al momento de nacer, es decir, se auto perciben con el género contrario. A pesar de que hoy en día han tenido algunos avances relacionados con el reconocimiento de sus Derechos Humanos en diversas partes del mundo, las personas trans siguen enfrentando discriminación en su vida cotidiana.

En ese tenor de ideas, las personas trans sufren la vulneración de sus prerrogativas en materia de trabajo digno y decente. En los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS 8) se establece la imperiosa necesidad de:

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, destaca el papel esencial del trabajo decente para todos en el logro del desarrollo sostenible...el trabajo decente, la creación de empleo, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo social forman parte de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Organización de las Naciones Unidas, s/f).

Por ello, es necesario establecer que al hablar de precariedad laboral, se vulnera su Derecho Humano al trabajo digno y decente al que alude nuestro derecho doméstico y las normas internacionales laborales. En el caso de los integrantes de la comunidad trans, esta vulnerabilidad se acrecienta debido a su expresión e identidad de género, así como por su orientación sexual. Todo ello les dificulta el acceso a empleos estables y bien remunerados, siendo objeto de discriminación en el ámbito laboral. Además, enfrentan la falta de protección legal y la carencia de servicios de salud relacionados con la transición de género.

Es así que la precariedad laboral afecta su entorno social y familiar, la seguridad económica y la estabilidad en el empleo, así como su salud física, mental y emocional; es decir, su proyecto de vida. Sin duda alguna, esta situación al interior de la comunidad trans es una problemática con diversas aristas. Muchas son las situaciones que contribuyen a este concepto de precariedad, entre ellas:

- a) La falta de empleos en razón de su identidad de género, lo que implica discriminación en relación con personas heterosexuales o cisgénero, situación que puede conllevar que las personas trans busquen opciones laborales que no les brinden el adecuado desarrollo personal;
- b) Discriminación laboral para ser ascendidos o detentar puestos de poder o de toma de decisiones, nuevamente esto se da con motivo de su expresión de género genera que vean limitada la posibilidad de tener puestos directivos o dentro del servicio público algún tipo de dirección o jefatura;
- c) Empleos poco remunerados debido al estigma que cosifica a las personas trans, y que muchas veces las obliga a aceptar trabajos temporales, sin seguridad social, sin capacitación o algún tipo de beneficio laboral. O bien dedicarse a oficios tan antiguos como es la prostitución;
- d) La ausencia de un marco legal que responda –adecuadamente– a la protección efectiva de las personas trans en sus centros de trabajo, especialmente en contra de la violencia, la discriminación y el acoso y hostigamiento sexual que pudieran sufrir; y
- e) Concatenado al punto anterior el cuidado de la salud física,

mental y emocional de las y los trabajadores se vuelve un punto medular para evitar la precariedad laboral. Nuestro país cuenta con una Norma Oficial Mexicana (NOM 035) que establece a cada centro de trabajo las directrices para el cuidado de los factores psicosociales; ya que la ansiedad, la depresión y el estrés son comunes en aquellos que enfrentan discriminación en el lugar de trabajo o luchan por mantener empleos estables. Esto puede llevar a una disminución en la calidad de vida y la capacidad para participar plenamente en la sociedad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha abordado este tema relativo a la precariedad laboral, estableciendo directrices y principios para promover empleos decentes y combatirla a través de sus diversos convenios. Ahora bien, es cierto que no hay un acuerdo específico que hable del concepto de “precariedad laboral”; sin embargo, existen varios convenios y recomendaciones emitidos por la OIT relacionados con la precariedad laboral.

De forma enunciativa y no limitativa, enumeramos aquellos que consideramos relevantes con el tema:

**Tabla 2. Convenios OIT Relacionados con la Precariedad Laboral**

Convenio	Nombre	Contenido	Ratificado por México
C 097	Sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Migrantes	Impone normas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades para los trabajadores migrantes. Esto es relevante para abordar la precariedad laboral que enfrentan las y los trabajadores migrantes debido a la discriminación y falta de protección laboral	No
C 100	Sobre la Igualdad de Remuneración	Este convenio, prohíbe la discriminación en materia de remuneración en el empleo. Aunque no aborda directamente la precariedad laboral, promueve la igualdad salarial y contribuye a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y reducir la brecha salarial que se asocia con la precariedad.	Si

C 111	Sobre la discriminación (empleo-ocupación)	Define el concepto de discriminación en el ámbito laboral y las categorías sospechosas Promueve la igualdad de oportunidades en el empleo.	Si
C 118	Sobre la igualdad de trato	Aplicable en materia de seguridad social, propone la igualdad de trato y de las prestaciones de sobrevivencia	Si [solo ha aceptado las ramas de la a) a la g) señaladas en el Convenio]
C 122	Sobre la política del empleo	Este convenio de gobernanza fomenta el pleno empleo, productivo y libremente elegido	No
C 140	Sobre la licencia pagada de estudios	El convenio, establece la licencia pagada de estudios a fin de que las personas trabajadoras puedan realizar estudios por un período determinado, durante las horas de trabajo y con pago de prestaciones económicas adecuadas	Si
C 142	Sobre el desarrollo de los recursos humanos	Los países tienen que desarrollar políticas públicas y llevar a la práctica programas sobre la formación profesional. Señala la importancia de los servicios públicos del empleo. Se debe velar por mejorar la aptitud del individuo y ayudar a todas las personas, en igualdad y sin discriminación alguna.	Si
C 155	Sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo	Establece normas para garantizar la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Aborda temas como las condiciones de trabajo seguras y saludables, fundamentales para reducir la precariedad laboral	Si

C 156	Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares	Reconoce la importancia de la conciliación entre el trabajo y la vida familiar y promueve medidas para ayudar a los trabajadores a cumplir con sus responsabilidades familiares sin sufrir discriminación o precariedad laboral	No
C 169	Sobre el Empleo y el Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia	Se centra en los derechos de los pueblos indígenas y tribales, aborda cuestiones relacionadas con el empleo y las condiciones laborales de estas comunidades, que a menudo enfrentan condiciones laborales precarias.	Si
C 175	Sobre el Trabajo a Tiempo Parcial	Establece principios para garantizar condiciones de trabajo equitativas y protección social para trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial. Aborda cuestiones como: igualdad de trato y oportunidades en comparación con los trabajadores a tiempo completo.	No
C 183	Sobre la Protección de la Maternidad	Señala el cuidado de la maternidad en el trabajo. Si bien no se centra en la precariedad laboral, promueve la igualdad de oportunidades para las trabajadoras embarazadas y lactantes, lo que puede prevenir situaciones precarias.	No
C 189	Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos	Menciona estándares que garanticen condiciones laborales decentes en el trabajo domésticos. Señala cuestiones relacionadas con la jornada laboral, la remuneración, la seguridad y salud en el trabajo, y la protección social; todas las cuales son relevantes para combatir la precariedad laboral.	Si

Fuente: Elaboración Propia con datos del Compendio de Instrumentos Internacionales de Derecho del Trabajo Tomo Tres (Compilaciones Jurídicas, 2022) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2023)

Estos convenios de la OIT, aunque no se centran exclusivamente en la precariedad laboral, establecen normas y principios tendientes al mejoramiento de las condiciones laborales, proteger los derechos de las y los trabajadores y promover la igualdad de oportunidades en el empleo, condiciones de trabajo justas y empleos decentes. Estos documentos contribuyen a la lucha contra la precariedad laboral y la justicia social a nivel internacional.

Por ello, es necesario que el abordaje de la precariedad laboral de la comunidad transgénero se realice desde el Estado a través de políticas públicas que sean cada vez más inclusivas, con la finalidad de combatir prácticas discriminatorias en razón de la identidad de género, para que las personas trans puedan acceder a empleos estables y bien remunerados.

Otro punto importante que se debe tener en cuenta es el acceso a los servicios de salud para las personas trans, mismo que deriva de la relación laboral, para garantizarles la debida atención médica. En última instancia, la lucha contra la precariedad laboral de la comunidad trans es un paso crucial hacia la igualdad de oportunidades, independientemente de su identidad de género.

La precariedad laboral para la comunidad trans puede variar significativamente de un país latinoamericano a otro, y no existe una fórmula que se aplique para todos, ya que cada nación enfrenta desafíos particularmente importantes en lo que respecta a este tema. Pero, a pesar de estos desafíos, existen movimientos activistas y organizaciones que luchan por los derechos y la igualdad de las personas trans en materia del trabajo; algunos países han promulgado leyes y políticas para proteger sus derechos en el lugar de trabajo; sin embargo, la implementación y cumplimiento son situaciones desafiantes en la mayoría de los casos.

#### **IV. Propuesta de Ley de Cupo Mínimo en el ámbito laboral**

Derivado de lo ya expuesto, hemos considerado que una de las estrategias que pudieran coadyuvar a disminuir la precariedad laboral es la implementación de una norma jurídica (ley) que obligue a tener un cupo mínimo en los centros de trabajo para personas de la comunidad trans. Esto, reitero, sería un mecanismo que abone en favor de ellas y ellos, a fin de mitigar la precariedad laboral.

Muchos países han implementado ordenamientos legales para combatir la precariedad laboral de grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Asia, países como Tailandia, India y Nepal han adoptado políticas para promover la igualdad de género y la no discriminación en el empleo, incluyendo medidas a favor de la inclusión de personas trans. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que, aunque

no hay cuotas laborales específicas para mujeres o personas de la comunidad LGBTTTIQ+, los convenios que estos países reconocen están a favor de la protección de los derechos laborales de las personas (Organización Internacional del Trabajo, 2023).

En países europeos como Noruega, Francia, Reino Unido y Portugal se han realizado regulaciones a favor de las cuotas de género, específicamente a favor de las mujeres, y algunas otras en pro de la comunidad trans, promoviendo la no discriminación y la igualdad a través de acciones afirmativas.

España cuenta con múltiples ordenamientos en favor de la diversidad sexual y/o identidad de género en materia del trabajo desde el año 2012. En ese mismo orden de ideas, comunidades como Cataluña, Extremadura, Andalucía, Las Canarias, Madrid y Murcia han realizado ordenamientos en pro de la comunidad LGBTTTIQ+, siendo las más recientes la Ley 2/2022 de La Rioja y la Ley 5/2022 de Castilla-La Mancha (Hernández Melián, 2023).

En América Latina, Uruguay promulgó en octubre de 2018 la Ley 19.684 en favor de la comunidad trans. La ley establece que dentro de los ejecutivos, legislativos y judiciales, así como en la Corte Electoral, los Tribunales de Cuentas, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, se debe destinar el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos (Gobierno de Uruguay, 2019).

En Argentina, se han adoptado leyes de cuota de género para garantizar la representación equitativa de mujeres en cargos públicos y en directorios de empresas estatales. En julio del 2021, se aprobó la Ley N.º 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que establece que al menos el uno por ciento de los puestos de trabajo en el sector público nacional deben ser ocupados por personas trans (Gobierno de Argentina, 2021).

Estas medidas buscan abordar la discriminación histórica y las desigualdades que enfrentan estas personas en el ámbito laboral, promoviendo su acceso al empleo formal. Combaten la precariedad laboral de la comunidad trans al establecer requisitos específicos para su inclusión en la fuerza laboral, tanto pública como privada, brindándoles oportunidades para acceder a empleos y salarios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su bienestar económico.

Este tipo de leyes de cupo mínimo también conlleva el empoderamiento económico de este sector social históricamente segregado y discriminado. Cuando el Estado les proporciona empleos y condiciones laborales estables y seguras, con este tipo de leyes de cupo

mínimo se les da mayor autonomía y control a las personas trans sobre sus vidas, reduciendo su dependencia de empleos precarios, insalubres o informales. Con ello, se reduce la brecha de género y se contribuye a la promoción de la igualdad en el trabajo.

Es importante destacar que las leyes de cupo mínimo a menudo generan debate y discusión. Algunos argumentan que estas leyes son necesarias para corregir la discriminación histórica y sistémica, mientras que otros pueden considerarlas como una intervención excesiva en el mercado laboral. Sin embargo, tenemos claro que su aplicación abona al logro de la igualdad de oportunidades.

Ahora bien, en México se han presentado diversas iniciativas de ley en la legislatura de la Ciudad de México (CDMX), relacionadas con cupos mínimos en materia laboral para personas trans. La última fue presentada el pasado 17 de mayo del 2022 por parte del diputado del partido MORENA Temístocles Villanueva Ramos, quien envió al entonces presidente de la mesa directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, un documento que, a letra señala:

...remito ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los Artículos 7, apartado F, numeral 4; 27, apartado B, numerales 2 y 4; 46, apartado B, numeral 1 y apartado C, numeral 7; 53, apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los Artículos 19; 20, fracción V; 31, fracción XIV; 104, fracción IX de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; los Artículos 10, fracción V; 18, 19 y se adicionan las fracciones XXII bis al Artículo 27 y la XXXV, recorriendo la subsecuente del Artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; los Artículos 1 y 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; el Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; y los Artículos 19, fracción I; y se adiciona el 23 bis de la Ley para el Reconocimiento y la Atención para las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México (Congreso Ciudad de México, 2022).

En dicha iniciativa, dentro de la exposición de motivos se establece de forma general que las personas de la comunidad trans y sus derechos laborales, históricamente, han sido vulnerados, incluso en contra de lo establecido desde 2015 cuando se firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos hoy como Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Asimismo, se mencionan las tres propuestas que sirven de antecedente a dicha iniciativa. La primera, de enero de 2022, a cargo de la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, cuya propuesta señala la modificación de algunas disposiciones relacionadas con el acceso

al trabajo en el servicio público de personas transexuales, travestis y transgénero. En marzo de ese mismo año, la “Coalición Mexicana LGBTTTIQ+ presenta iniciativa ciudadana ante el Congreso Federal para combatir la precariedad laboral”, y en abril, la Asociación Yucatrans presentó otra propuesta de iniciativa de ley para la Inclusión Laboral Trans y No Binaria ante el Congreso del Estado de Yucatán (Congreso Ciudad de México, 2022).

Por lo tanto, es de vital importancia que México implemente esta ley de cupo mínimo en favor de la comunidad trans y con una perspectiva de Derechos Humanos. Esta ley debe ir acompañada de mecanismos de protección que garanticen el acceso a oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en sus empleos, así como de programas de sensibilización y capacitación para patrones (empleadores) y trabajadores, a fin de promover la inclusión de personas trans en el ámbito laboral y en otros aspectos de la sociedad.

## **V. Conclusiones**

Los Derechos Humanos laborales de las personas están debidamente establecidos en nuestra Carta Magna. Adicionalmente, como nación, hemos firmado y ratificado diversos convenios que regulan el trabajo digno y decente, así como el trato igualitario de las y los trabajadores.

Por ello, hablar de precariedad laboral, específicamente dentro de la comunidad trans, es un problema que varía en su alcance y naturaleza en diferentes países latinoamericanos. Sin embargo, es un tema importante en toda la región que requiere atención y acción para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para todas las personas, independientemente de su identidad de género.

Es importante destacar que, si bien las leyes relativas al cupo mínimo o de cuotas de género son estrategias valiosas (acciones afirmativas) que promueven la igualdad de oportunidades, no son una solución única para todos los desafíos que enfrenta la comunidad trans.

Sin duda alguna, la entrada en vigor de una ley en favor de un cupo mínimo para las personas trans debe ir acompañada de campañas que fortalezcan la inclusión, no discriminación y la no violencia, así como con medidas para garantizarles el acceso a oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en sus empleos.

También es necesaria la participación de la comunidad trans en la elaboración y aplicación de este tipo de leyes a fin de garantizar su efectividad y legitimidad, ya que una ley de cupo mínimo no solo es un acto de justicia social, sino que impacta de manera positiva en el desarrollo económico de cualquier país.

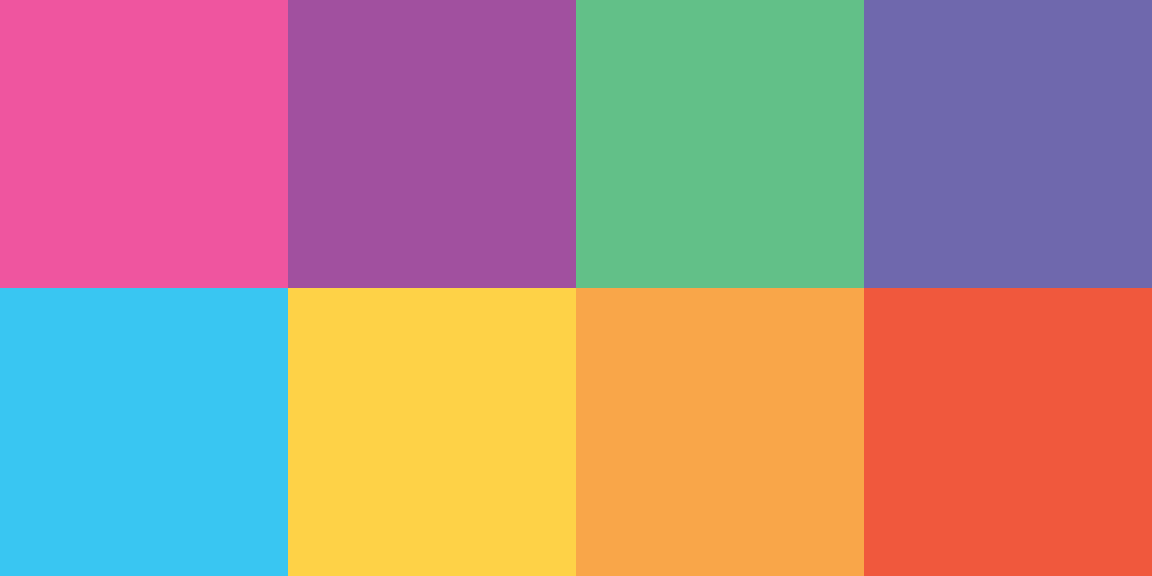
Finalmente, y como ya se ha establecido claramente en las

líneas anteriores, estas acciones y propuestas legales combaten la discriminación, reducen la precariedad laboral y promueven una mayor inclusión y diversidad en el ámbito laboral, lo que beneficia a todos. Esta medida es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más igualitaria y justa.

## VI. Lista de fuentes

- ALONSO ROYANO, F. (01 de abril de 2008). *Amigos de la Egiptología*. Obtenido de <https://egiptologia.com/el-derecho-del-trabajo-en-el-antiguo-egipto/>
- BERTMAN, S. (2003). *Hand Book to life in ancient Mesopotamia*. New York: Oxford University Press.
- BIBLIA ONLINE. (s/f). *Biblia Online*. Obtenido de <https://www.biblia.es/biblia-buscar-libros-1.php?libro=genesis&capitulo=3&version=rv60>
- CARBALLO, A. (03 de febrero de 2022). *Quonomy*. Obtenido de <https://quonomy.com/que-significa-el-mito-de-prometeo-leyenda-y-explicacion-facil>
- CARTWRIGHT, M. (15 de mayo de 2018). *World History Encyclopedia en Español*. Obtenido de <https://www.worldhistory.org/trans/es/2-483/la-sociedad-en-la-antigua-grecia/>
- CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S. (15 de octubre de 2021). *Historia National Geographic*. Obtenido de [https://historia.nationalgeographic.com.es/a/vida-laboral-roma-y-consideracion-trabajadores-segun-su-oficio\\_17314](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/vida-laboral-roma-y-consideracion-trabajadores-segun-su-oficio_17314)
- COMPILACIONES JURIDICAS. (2022). *Compendo de Instrumentos Internacionales del Derecho del Trabajo*. Ecatepec, Estado de México: Compilaciones Jurídicas.
- CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (17 de mayo de 2022). *Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos...* Obtenido de <https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN-183-16-17-05-2022.pdf>
- CORDÓN I SOLÀ-SAGALÉS, I. (14 de septiembre de 2021). *Historia. National Geographic*. Obtenido de [https://historia.nationalgeographic.com.es/a/justicia-faraon-antiguo-egipto\\_12725](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/justicia-faraon-antiguo-egipto_12725)
- GOBIERNO DE ARGENTINA. (JUNIO de 2021). *Observatorio de Tributación y Género*. Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/economia/politricatributaria/observatorio-de-tributacion-y-genero/ley-de-promocion-del-acceso-al>
- GOBIERNO DE URUGUAY. (29 de abril de 2019). *Centro de Información Oficial*. Obtenido de Normativa y Avisos Legales del Uruguay: <http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018>
- Hernández Melián, A. (2023). *Análisis y clasificación de las políticas de empleo para personas trans en España*. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 115-132.

- MARK, J. J. (24 de junio de 2021). *World History Encyclopedia*. Obtenido de <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19882/el-codigo-de-hammurabi/>
- NOAH KRAMER, S. (1956). *History Begins at Sumer*. Pennsylvania: University Pennsylvania Press. Obtenido de <https://archive.org/details/Kramer1956HistoryBeginsAtSumer/page/n51/mode/2up>
- ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS. (s/f). *Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Desarrollo Sostenible*. Obtenido de <https://sdgs.un.org/es/topics/employment-decent-work-all-and-social-protection>
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (2023). *NORMLEX*. Obtenido de [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:::P11200\\_INSTRUMENT\\_SORT:4](https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:::P11200_INSTRUMENT_SORT:4)
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (2023). *Organización Internacional de Trabajo*. Obtenido de [http://oit.org/dyn/natlex/natlex4.byCountry?p\\_lang=es](http://oit.org/dyn/natlex/natlex4.byCountry?p_lang=es)
- PÁRAMO MONTERO, P., & BUENO PAREJA, C. (2018). *Tendencias legislativas en seguridad y salud en el trabajo con enfoque preventivo* (primera ed.). Buenos Aires, Argentina: Organización Internacional del Trabajo. Recuperado el 2023, de [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-americas/-/-ro-lima/-/-ilo-buenos\\_aires/documents/publication/wcms\\_619052.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-americas/-/-ro-lima/-/-ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_619052.pdf)
- PÉREZ VARELA, V. M. (2006). Esbozo Histórico del nacimiento y evolución del derecho del trabajo. *Jurídica: Anuario de Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, 261-285. Obtenido de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/viewFile/11632/10642>



# **ADOPCIÓN EN MATRIMONIOS IGUALITARIOS COMO DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA EN MÉXICO**

---

**Diana Laura Castillo Tejeda**

**Judith Aguirre Moreno**

**Diego Iván Zavaleta García**

## **Capítulo IV**

### **Adopción en matrimonios igualitarios como derecho a la igualdad jurídica en México**

Diana Laura Castillo Tejeda\*  
Judith Aguirre Moreno\*\*  
Diego Iván Zavaleta García\*\*\*

**SUMARIO:** I. Antecedentes; II. La auto-identificación de las personas (identidad sexual); III. Derechos en la Población LGTBIQ; IV. Adopción. V. Interés superior de la niñez; VI. Discriminación; VII. Conclusión.

El presente capítulo aborda diversos aspectos relacionados con la adopción por parte de parejas del mismo sexo, centrándose en los avances históricos y jurídicos, así como en el impacto de estas decisiones en la sociedad y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Los objetivos son: analizar el cambio en la concepción tradicional de familia; examinar los hitos legales y jurisprudenciales que han permitido la adopción homoparental en diferentes estados de México; y comprender el concepto del interés superior del menor en el contexto de la adopción. El método de investigación analítico se basa en el estudio documental de legislaciones, jurisprudencias y documentos internacionales, así como en la revisión de casos emblemáticos que han marcado un precedente en este ámbito. Con todo esto, buscamos responder a la pregunta: ¿Cómo se han desarrollado las leyes y las políticas públicas en México para garantizar el derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, considerando el interés superior del menor y los principios de igualdad y no discriminación?

#### **I. Antecedentes**

La adopción por personas del mismo sexo representa una novedad histórica en dos aspectos fundamentales de la cultura occidental. En primer lugar, refleja los valores contemporáneos, donde han surgido nuevos conceptos de familia. En segundo lugar, se enmarca en el ámbito

---

\* Alumna de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana del Sistema de Enseñanza Abierta, sede en Xalapa, correo institucional: zs22000352@estudiantes.uv.mx

\*\* Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y Profesora de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, sede en Xalapa, correo institucional: juaguirre@uv.mx

\*\*\*Egresado de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, sede Xalapa de la Universidad Veracruzana. Correo electrónico de contacto: zavarca.5@gmail.com

científico, donde la homosexualidad dejó de considerarse una patología médica y una perversión psicológica hace aproximadamente treinta años según la OMS.

Este modelo de adopción genera numerosos interrogantes al redefinir el concepto tradicional de familia, que se fundamenta en el triángulo padre-madre-niño. Esto se alinea con la concepción de nuevas formas de filiación y transforma por completo el concepto mismo de familia.

El caso histórico que sentó un precedente al respecto ocurrió en Chile con el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. En esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 24 de febrero de 2012, se declaró por unanimidad que el Estado era responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación en perjuicio de Karen Atala Riffo (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2012).

Otro hito importante se dio en el Estado de Colima en 2013, cuando se permitió la adopción homoparental al reformar el Artículo 147 del Código Civil. Aunque estas “relaciones conyugales” eran diferentes de los matrimonios heterosexuales, recibieron los mismos derechos. Sin embargo, en 2016, se derogó este artículo para dar paso al matrimonio igualitario, manteniendo el derecho de adopción para parejas del mismo sexo.

En 2014, se derogó el Artículo 385-7 del Pacto Civil de Solidaridad del Código Civil del Estado de Coahuila, que prohibía a parejas del mismo sexo compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro.

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, argumentando que era discriminatoria al impedir la formación de familias no tradicionales (Congreso Coahuila, 2015).

En julio de 2016, el Estado de Morelos reformó su Constitución para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, promoviendo así la defensa de los Derechos Humanos (Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 1930).

En 2016, la SCJN declaró inconstitucionales ciertas porciones normativas en Chiapas, permitiendo a las parejas homoparentales ejercer su derecho al matrimonio y a la adopción (SCJN, 2016). Similarmente en Aguascalientes, en abril de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la definición de “matrimonio” en el Código Civil estatal, otorgando a las parejas homoparentales el derecho a la adopción al exigir la reforma de los Artículos 143 y 144, que establecían limitaciones basadas en la procreación y la composición de género (DOF, 2019).

## **II. La auto-identificación de las personas (identidad sexual)**

La teoría queer es una importante corriente de pensamiento sobre esta temática. Según Seidman (citado por Beasley, 2006), este término se deriva de una expresión popular para referirse a drags, travestis, transgéneros y transexuales: “extraños”. Uno de los aportes destacados de esta teoría es el concepto de intersexualidad (tercer sexo), que se refiere a individuos cuya anatomía reproductiva y genital no encaja en las definiciones convencionales de hombre o mujer. Este concepto surgió en los años noventa cuando la liberación gay estaba en auge, pero la población trans e intersexual aún no encontraba inclusión. Este movimiento ha influido tanto que ahora se habla de estas comunidades como población LGBTTTIQ+, reconociendo la identidad intersexual como una posibilidad más dentro de la diversidad sexual (Ramírez, 2019).

En el ámbito de los Derechos Humanos y la sexualidad de la población LGBTTTIQ+, se ha centrado en la visibilización de las identidades sexuales y de género, así como en la integración, el autoapoyo y el fortalecimiento interno de los grupos, actualmente extendiéndose a actividades de incidencia política.

Como resultado, ha habido una ampliación considerable en el vocabulario y la percepción de acciones o diálogos que antes pasaban desapercibidos por considerarse “normales”. Por lo tanto, es fundamental comprender algunos conceptos importantes para tratar a todas las personas por igual, independientemente de su nacionalidad, orientación sexual, expresión o identidad de género.

La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, que podría no corresponder con el sexo asignado al nacer. Corresponde a la percepción consciente y natural de cada persona de sentirse hombre, mujer o no binario, independientemente de su género biológico. Esta vivencia es clara y puede externarse o no físicamente a decisión del individuo.

La expresión de género se relaciona con la manifestación externa del género a través de la forma de hablar, vestir, de comportarse, su interacción social, modificaciones corporales, entre otras. Se entiende como la forma en que el individuo desea ser percibido por la sociedad.

La orientación sexual se refiere a la atracción emocional y sexual hacia personas de un género diferente al suyo, del mismo género o de más de un género.

El sexo asignado al nacer se basa en la percepción de los genitales por parte de otros, aunque algunas personas no encajen fácilmente en las categorías de hombre o mujer debido a variaciones biológicas.

El estigma es el conjunto de actitudes y creencias que desacreditan

o rechazan a una persona o un grupo de personas por considerarlas diferentes; los prejuicios califican a una persona anticipadamente por características comunes previamente aceptadas, y; los estereotipos se refieren a la visión generalizada sobre algo o alguien de manera inmutable. Estos, forman parte del fenómeno social conocido como *discriminación*, que implica tratar desfavorablemente a ciertas personas por creencias subjetivas, lo que puede derivar en comportamientos irracionales y daños sociales y personales.

En el contexto de la heteronormatividad, se observa un sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, como refleja el Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: “El marido y la mujer podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo.” (Congreso del Estado de Veracruz, 1932).

La tolerancia represiva, según Herbert Marcuse, menoscaba la autodeterminación al perseguir la tolerancia como un objetivo ambivalente, por ello es importante que las personas estén en condiciones de deliberar y escoger sobre la base de conocer y tener acceso a información auténtica para sí tener un pensamiento crítico autónomo.

La categoría sospechosa implica interpretar y aplicar la igualdad ante la ley. Se le da el nombre a la irregularidad del ejercicio de convencionalidad en la interpretación de este derecho.

Es crucial comprender las diversas formas de autoidentificación en la orientación sexual, la expresión y la identidad de género porque es más que simplemente identificar a la población LGBTTTIQ+; se trata de entender la diversidad presente en la sociedad. El concepto de género abarca roles, características y oportunidades definidos por la sociedad, independientemente de las características biológicas y fisiológicas que posee cada individuo.

La heterosexualidad se refiere a la atracción romántica y sexual hacia personas de un sexo distinto, y la cisgénero implica identificarse con el género asignado al nacer. Esto es paralelo a la preferencia sexual, ya que puedes o no tener preferencias sexuales heterosexuales.

El término *gay* se emplea para referirse a personas homosexuales, es decir, hombres que tienen preferencias sexuales por otros hombres, y; lesbiana se refiere a mujeres orientadas sexualmente hacia otras mujeres.

La bisexualidad implica interés romántico o sexual hacia hombres como mujeres. En tanto a identificarse como no binario desafía la concepción binaria del género: no te auto percibes como hombre o como mujer y entiendes el género como algo mucho más diverso. Esto no significa que carezcas de preferencias sexuales.

La asexualidad asume que no existe orientación sexual específica, esto es, que no sienten atracción sexual por ningún género, pudiendo identificarse o no con algún género.

Travesti es un término utilizado para personas que, al expresar su identidad, adoptan prendas, actitudes y comportamientos asociados al género opuesto al asignado al nacer, sin que esto implique un cambio en la preferencia sexual. Las personas transgénero son aquellas cuya identidad no coincide con la asignada al nacer, pudiendo realizar una transición al género contrario o no binario mediante el uso de fármacos hormonales o la sola expresión de género. A diferencia de las personas transexuales que también se identifican con el género opuesto, pueden optar por intervenciones médicas quirúrgicas y terapias hormonales ya que se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y sexo opuesto.

Las personas intersexuales presentan variaciones en la anatomía y fisiología que no se ajustan a los estándares definidos para un solo sexo. Estas características no son estrictamente visibles al momento de nacer, sino se desarrollan mientras trascienden a la adultez.

El término queer se ha reapropiado para referirse a quienes no se identifican estrictamente como hombre o mujer. Abarca tanto orientaciones sexuales como identidades de género. Así mismo, este término se vincula al activismo LGBTTTIQ+ y otros movimientos relacionados con diversidad e inclusión.

En cuanto a la pansexualidad implica atracción hacia personas independientemente de su sexo, género, identidad de género u orientación sexual. Por otra parte, está la expresión de género muxe, que no depende de la orientación sexual, sino es un género cultural, función social y una identidad.

### **III. Derechos en la población LGBTTTIQ+**

Los derechos de la población LGBTTTIQ+ en México con respecto a la adopción por parejas del mismo sexo biológico no son explicativos, pero sí declarativos en cuanto al sentido general de la norma. Por ejemplo, el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia” (Congreso de la Unión, 2019).

La población LGTBIQ está compuesta, sin lugar a duda, por personas que han sido categorizadas según las leyes en cuanto a su sexo biológico, el cual, en esta situación, es su única herramienta para exigir su derecho al desarrollo de la familia de una forma no convencional y, por lo tanto, no contemplada en el artículo anterior. Como sabemos, el sexo biológico es

solo una variable en un mar de posibles situaciones y acontecimientos que pueden ocurrirle a un ser humano. Por ello, merecen tener la apertura de las leyes y del Estado tanto como puedan proporcionarles para satisfacer las necesidades básicas que sus Derechos Humanos les confieren. Soslayando lo anterior, como se menciona en el Artículo 1, en los puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos sobre la obligación de respetar los Derechos se refiere a que:

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1981)

México, como Estado Parte de la Convención, cuenta notablemente con las pautas internacionales para hacer valer los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna por su orientación sexual o identidad de género, dejando claro que los derechos son para todos.

Mientras que el Artículo 1 de la Convención Americana nos exhorta a no ejercer actos de discriminación, el Artículo 24 protege el derecho a la igual protección de la ley, es decir, prohíbe la discriminación de derecho, no solo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado internacional, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado no respeta o garantiza un derecho convencional o, por el contrario, si la discriminación resulta de la ley interna o de su aplicación, debe analizarse a la luz del Artículo 24 de la Convención Americana.

En ese mismo sentido, la Convención menciona en su Artículo 17 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad; por lo tanto, es imperante que el Estado parte tome las medidas necesarias para protegerlo. Sin embargo, aunque la Constitución mexicana se encuentra homologada a las leyes internacionales y a la protección de los Derechos Humanos, el ámbito estatal carece de armonización y lleva a tomar otros mecanismos de defensa, reconocidos por la carta magna, pero con la actualización de las normas generales en materia de Derechos Humanos, procederíamos sin violentar los derechos de las minorías, en este caso en particular.

Siendo así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, habiéndose aceptado su derecho a contraer matrimonio al igual que las parejas heterosexuales que deciden hacerlo, sin otros

modelos de convivencia como lo fue en el Estado de Campeche con las sociedades civiles de convivencia, donde se les restringía el derecho de adoptar, en pareja o de forma individual, y en caso de tener hijos propios, no se les permitía compartir la patria potestad de los hijos con la pareja; es por ello que emite la siguiente jurisprudencia:

ADOPCIÓN. LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO TIENEN EL DERECHO A SER CONSIDERADOS PARA REALIZARLA EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS HETEROSEXUALES.

Esta Primera Sala ha establecido en varios precedentes que la vida familiar de dos personas del mismo sexo no se limita a la vida en pareja sino que, como cualquier pareja heterosexual, se puede extender, de así desearlo, a la procreación y la crianza de niños y niñas. También ha destacado que existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreadas o adoptadas por algún miembro de la pareja, o parejas homosexuales que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear o tienen hijos a través de la adopción, con independencia de que se les permita el acceso al poder normativo para contraer matrimonio. Ahora bien, una vez establecido que no existe razón constitucional para negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y que es discriminatorio crear una figura alternativa para ellas, esta Primera Sala determina que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar, en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales y cumpliendo con los requisitos pertinentes. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015).

#### **IV. Adopción**

La adopción homoparental se fundamenta en el interés superior del menor de edad más que en el derecho que puedan tener las personas para adoptar. En este ámbito, se han presentado avances normativos y jurisprudenciales que han impactado en el reconocimiento de los derechos de las personas con condición sexual distinta al modelo tradicional, reivindicando el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y disfrutar de ella.

En este punto, tratándose del derecho a adoptar, los derechos de los menores se encuentran en posición prevalente frente a los intereses de los adoptantes, pero esto no se traduce en que la condición sexual de una persona o de una pareja lo degrade al considerarlo, por sólo ese hecho, como nocivo para el desarrollo de un menor de edad. Sino sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo del menor establecidas en la ley, para que la autoridad evalúe y decida respecto de la que presente su mejor opción de vida.

En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es una norma jurídica cuya validez está en el mismo nivel que los tratados internacionales. Esta es vinculante por sí misma, es decir, que impone una obligación efectiva a quienes están sujetos a su régimen. Por lo tanto, las normas secundarias, en este caso, las normas que rigen a los estados dentro del territorio mexicano que no respeten su contenido son inválidas.

Sin embargo, las normas que contienen los Derechos Humanos fundamentales están redactadas de manera abstracta e indeterminada. Por ello, para que sean vinculantes y tengan verdadero vigor, es necesario que los jueces y los tribunales interpreten la Constitución para concretizar dichos derechos.

México es un país incorporado a numerosos tratados internacionales, en su mayoría reflejados en la Constitución, tal como lo son las categorías sospechosas que se reflejan en su Artículo 1 a continuación:

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (Congreso de la Unión, 2011)

Esto nos lleva a tener una amplia protección de los derechos de los grupos vulnerables en el Estado mexicano, como lo es la población LGTBTTIQ+, en cuanto al derecho proclamado por la misma Constitución sobre el libre desarrollo de la familia. Actualmente, la familia muestra diferentes facetas sobre su desarrollo y diferentes maneras en que se lleva a cabo.

Podemos decir que, en México, la familia no está constituida solo por padre, madre e hijos. Existen familias compuestas, donde los hijos solo son por parte de uno de los cónyuges, o donde los abuelos son parte importante de la crianza debido a la ausencia de padres biológicos por razones de fuerza mayor, parejas de personas del mismo sexo, los cuales uno de ellos decide adoptar o procrear, familias monoparentales y así muchos supuestos que conforman el núcleo al que llamamos familia.

Los cambios en esta área del derecho hablan de una novedosa relación entre el derecho constitucional y el derecho de familia que parte de dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el desarrollo del derecho a la igualdad.

Es criterio uniforme de las fuentes normativas y jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es una

cuestión de orden público y necesidad prioritaria asegurar el pleno desarrollo del niño, niña o adolescente y su identidad con el seno familiar.

Uno de los prejuicios presentes en la sociedad se relaciona con la orientación sexual y de género de las personas, que ha sido reforzado por la tipificación del rol sexual. En la sociedad se han establecido estereotipos sexuales que producen una imagen de un grupo social y exigen roles específicos de acuerdo con el sexo de cada persona. En este orden de ideas, ligado a creencias sociales o psicológicas presentes en un grupo determinado, se enseña a las niñas, niños y adolescentes cuáles son las formas adecuadas de comportamiento según el sexo y el rol que cada uno debe cumplir en la sociedad.

Esto no es sustentable en cuanto al progreso de las nuevas formas de organización familiar y para las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad, ya que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y en particular, educado en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. La cual no tiene restricciones en cuanto a preferencias sexuales o identidades de género porque no define la forma ni los medios para proporcionarle dichas necesidades a las diferentes etapas de la niñez.

Soslayando lo anterior, es importante considerar que tanto en México como en el mundo existen niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles, los cuales necesitan protección y cuidado especiales para su desarrollo y el Estado con sus medios es muy difícil que los otorgue con suficiencia. Es por ello por lo que se considera la adopción en una o más personas, con el interés de formar una familia y brindarle el soporte necesario al infante.

La adopción es una institución que busca la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el afán de incorporarlos a una familia donde puedan proporcionarles afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Así, la adopción debe ser considerada un derecho del menor de edad por el cual se debe procurar en todo momento garantizar la protección de sus intereses (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015).

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a este tema, que es actualmente una línea delgada entre la discriminación a la población LGBTTTIQ+ tipificada como categoría sospechosa y el derecho a desarrollar libremente una familia.

Debido a la falta de armonización de la normativa mexicana respecto a los tratados internacionales, se presume una discriminación sistematizada por parte de la soberanía estatal (esto en la mayoría de los Estados de México). Es necesario acudir a las autoridades competentes y tribunales especializados para que un matrimonio igualitario pueda adoptar un niño, niña o adolescente.

## **V. Interés superior de la niñez**

El 20 de noviembre de 1989 se proclamaron por primera vez en el mundo los Derechos de los Niños, los cuales llamaron Convención de los Derechos del Niño. Este es un ordenamiento internacional de alta prioridad, con énfasis en la protección y el desarrollo del niño, ya que de ellos depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana.

Por esto, los niños no deben verse como adultos en proceso de formación ni como objetos pertenecientes a sus padres y en favor de los cuales se deben tomar decisiones; son sujetos de derecho, con la capacidad de defender y exigir sus derechos, y de los cuales importa también su libertad de expresión, bienestar y protección. Así, las infancias son una etapa especial que debe estar protegida, durante la cual se debe ayudar a crecer, aprender y desarrollarse libremente.

La familia, la comunidad y el Estado son responsables de garantizar sus derechos de manera progresiva e integral. Mediante la Convención, el Estado mexicano y cada Estado Parte de esta tomaron la obligación de adaptar su legislación interior con la finalidad del más alto nivel de prioridad al interés superior de la niñez.

Por ello, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a ese principio, enfatizando que es deber de los tribunales atender al interés superior de la niñez y la adolescencia, con estricto escrutinio y particularidades del caso; asimismo, señala que debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte; se acentúa también la obligación del juez de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa (Naciones Unidas, 2016).

La flexibilidad del concepto del Interés Superior de la Niñez permite que sea adaptable a la situación de cada niño y la evolución de los conocimientos en materia de desarrollo infantil. Sin embargo, también puede dejar margen para la manipulación: el concepto ha sido utilizado abusivamente por gobiernos y autoridades para justificar políticas racistas; por padres para defender sus propios intereses en las disputas de custodia; y, en el caso de México, como protesta de un porcentaje de

la población para impedir que sean adoptados por parejas del mismo sexo.

Con respecto a las medidas de aplicación, para que el interés superior del menor sea consideración primordial y se atienda al promulgar disposiciones legislativas y políticas públicas en todos los niveles de gobierno, se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes a fin de prever las consecuencias reales de la aplicación.

A partir de las consideraciones internacionales sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños, niñas y adolescentes procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear, es por esto por lo que se emite la siguiente jurisprudencia:

ADOPCIÓN. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD SE BASA EN LA IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES, DENTRO DE LA CUAL SON IRRELEVANTES EL TIPO DE FAMILIA AL QUE AQUÉL SERÁ INTEGRADO, ASÍ COMO LA ORIENTACIÓN SEXUAL O EL ESTADO CIVIL DE ÉSTOS.

El punto fundamental que considerar en una adopción es el interés superior del niño, niña o adolescente, con la intención de que éste forme o se integre en una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo, derechos todos inherentes a su persona. La idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al menor de edad, para incluirlo a una familia, y no puede atender, de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo de estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de convivencia), ni por cierta orientación sexual. Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno pone en riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de condiciones como posibles adoptantes y lo que debe ser tomado en cuenta en dicho proceso es si la persona o personas cumplen con una serie de requisitos esenciales para ser consideradas como adoptantes, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindarle una familia a los menores de edad. Dentro de dichos requisitos esenciales

no puede figurar el tipo de unión civil al que pertenezcan los posibles adoptantes, ni la orientación sexual de éstos, pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad para brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde éstos se desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la interpretación -implícita o explícita- en el sentido de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016).

## **VI. Discriminación**

Hemos de entender que la discriminación es una problemática que trasciende la historia de la civilización hasta la actualidad ya que, a pesar de los mecanismos nacionales e internacionales aplicados, sigue existiendo un fuerte sesgo hacia los grupos de personas que se consideran vulnerables (mujeres, niñas, niños y adolescentes, afrodescendientes y la población LGBTTTIQ+ en occidente).

Hasta hace pocos siglos, un hombre podía morir en la hoguera por el hecho de haber mantenido relaciones sexuales con otro hombre, adulto, en privado y con su consentimiento, después las sentencias se aligeraron: cárcel o tratamiento psiquiátrico obligatorio. Ahora no se pierde la libertad, pero si se condiciona, es decir, en ocasiones se pierde el empleo, se vulnera la dignidad y las oportunidades de ser iguales ante la ley.

Uno de los prejuicios presentes en la sociedad se relaciona con la orientación sexual y de género de las personas, que ha sido reforzado por la tipificación del rol sexual. En la sociedad se han establecido estereotipos sexuales que producen una imagen de un grupo social y que exigen roles específicos de acuerdo con el sexo biológico. En este orden de ideas, ligado a creencias sociales o psicológicas presentes en un grupo determinado, se imponen cuáles son las formas adecuadas de comportamiento según el sexo y el rol que cada uno debe cumplir en la sociedad.

En el caso de México es notable porque, siendo el país que dio al mundo el adjetivo de “macho”, nuestras leyes nunca han considerado delito las relaciones sexuales entre el mismo sexo cuando se dan entre adultos y en privado, condición que también se impone a las relaciones heterosexuales (González de Alba, 2003).

Cuando la medicina decidió que la homosexualidad debía ser una enfermedad, de manera natural se propuso encontrar la cura. Así se han cometido todo tipo de crímenes contra homosexuales: lobotomía, esto es corte de lóbulos frontales del cerebro, electrochoques y castración; psicoanálisis y medicamentos (Alba, 2007).

Hasta que, por fin en el año 1973 la American Psychiatric Association

eliminó la homosexualidad de su Manual; la OMS no lo haría hasta 1990, pero fue un primer paso en la lucha por los derechos de las personas LGBTTTIQ+, que ha conseguido grandes avances desde entonces.

Es de entenderse que pertenecer a la población LGBTTTIQ+ no tiene efectos menores sobre el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, las actitudes de la sociedad heteronormada hacia esta naturaleza, crean una situación de tensión que puede tener un efecto profundo en el desarrollo de la personalidad y puede conducir a un deterioro del carácter de un género que impide la integración efectiva en la sociedad, por ello la hostilidad hacia este grupo de personas las hace vulnerables. No todas las personas son capaces de resistir presiones y esto provoca bajas sociales, es decir, se les genera tal daño que los hacen incapaces de vivir sus propias vidas por los prejuicios y estigmas impuestos hacia ellos, siendo desde su origen, pero aprobado medicamente desde hace seis décadas, un estilo de vida normal como cualquier otro.

El resultado de estas conductas discriminatorias ejercidas hacia este grupo de personas que no sólo son adultos, ya que también es característico entre adolescentes, ha escalado a niveles extraordinarios y por ello, la Organización de las Naciones Unidas instan a los Estados a proteger a las personas LGBTTTIQ+ y respetar las normas internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación, aplicando entre otras las siguientes medidas:

- Prohibiendo la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as LGBTI en todos los ámbitos, incluyendo educación, empleo, sanidad, vivienda, protección social, justicia y situaciones de asilo y de privación de libertad;
- Garantizando el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans sin condiciones abusivas;
- Combatiendo los prejuicios contra las personas LGBTI mediante el diálogo, la educación pública y la formación;
- Garantizando que las personas LGBTI sean consultadas y participen en la elaboración, aplicación y seguimiento de leyes, políticas y programas que les afecten, incluyendo iniciativas humanitarias y de desarrollo (United Nations Human Rights, 2015).

En el mismo tenor, hemos de incluir a los matrimonios constituidos por personas del mismo sexo biológico comúnmente llamados en México matrimonios igualitarios, en la igualdad de condiciones para adoptar a un niño, niña o adolescente o en su caso, una persona discapacitada, con las mismas posibilidades que tendría un matrimonio heterosexual, ya que, los hijos de las familias homosexuales no se diferencian de las que no lo son.

Este procedimiento se ha llevado a cabo legalmente por uno de los miembros de la pareja conyugal, dado que teóricamente no está vedada la adopción individual o monoparental a los homosexuales, sólo por el hecho retórico de ser inconstitucional preguntar la orientación sexual del futuro padre o madre durante el proceso.

En ese sentido, la adopción por matrimonios igualitarios debería seguir la misma línea, ya que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes mencionada en este capítulo: “los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar, en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales”. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015)

## **VII. Conclusión**

La homoparentalidad o matrimonios igualitarios, que se refiere a familias conformadas por padres del mismo sexo, forma parte de la realidad actual y debe entenderse como un escenario de desarrollo, socialización y realización personal. Los prejuicios sociales son la perspectiva colectiva con la que un grupo de personas se identifica de manera negativa respecto a las características o comportamientos de otras personas, lo que en muchos casos se traduce en actos de discriminación. Uno de los sectores en riesgo de vulneración de derechos y víctima de los prejuicios sociales son las personas con orientación sexual e identidad de género no predominante.

Los matrimonios igualitarios están siendo afectados en relación con lo anterior, no solo en la esfera social, sino también en la jurídica. Esto ha sido un factor clave para desestimar normas, lo que conlleva a un problema de discriminación consentida al negar la posibilidad de ejercer su derecho al desarrollo de la familia, fundamentado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto incluye la consolidación de una familia mediante la adopción y respalda los estatutos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

## **Referencias bibliográficas**

- Caso Atala Riffo Vs. Chile. (2012, 24 febrero). Consejo de Derechos Humanos. Recuperado 1 de diciembre de 2023, de <https://cdh.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/caso-atala-riffo.pdf>.
- Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. (2015, 15 diciembre). Congreso de Coahuila. Recuperado 6 de noviembre de 2023, de [https://www.congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes\\_Coahuila/coa02.pdf](https://www.congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa02.pdf)

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, QUE REFORMA LA DEL AÑO DE 1888. (1930). Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Recuperado 12 de noviembre de 2023, de <http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/constitucion/pdf/CONSTMOR.pdf>
- Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos: LGBTI+. (2016, 9 noviembre). Semanario Judicial de la Federación. Recuperado 21 de octubre de 2023, de <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=198144>
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2018. (2019, 16 agosto). Diario Oficial de la Federación. Recuperado 3 de octubre de 2023, de [https://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5568261&fecha=16/08/2019#gsc.tab=0](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568261&fecha=16/08/2019#gsc.tab=0)
- Joya Ramírez, N. (c. 2019). Ciudadanía y Derechos Humanos en la Comunidad LGBT: Una mirada desde la bioética. (23a ed. y NLM, Vol. 18) [Impreso]. Miller Alejandro Gallego Cataño. <https://www.uelbosque.edu.co/investigaciones/editorial>
- Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (1932, 15 septiembre). Congreso del Estado de Veracruz. Recuperado 12 de octubre de 2023, de <https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CODIGOCIVIL12102022F.pdf>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2019, 6 junio). Cámara de Diputados. Recuperado 9 de octubre de 2023, de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Convención Americana sobre los Derechos Humanos. (1981, mayo). Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuperado 30 de septiembre de 2023, de [https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion\\_ADH.pdf](https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf)
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2015, 24 noviembre). ADOPCIÓN. LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO TIENEN EL DERECHO A SER CONSIDERADOS PARA REALIZARLA EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS HETEROSEXUALES. Semanario Judicial de la Federación. Recuperado 30 de septiembre de 2023, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010482>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2011, 10 junio). Cámara de Diputados. Recuperado 26 de septiembre de 2023, de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- ADOPCIÓN POR PAREJAS DEL MISMO SEXO. Acción de Inconstitucionalidad 8/2014. (2015, 11 agosto). Sentencias relevantes. Recuperado 2 de noviembre de 2023, de <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/>

default/files/sentencias-emblematicas/resumen/2020-02/Resumen%20AI8-2014%20DGDH.pdf

Observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño (art.4). (2016, 21 junio). Plataforma de la infancia. Recuperado 2 de noviembre de 2023, de [https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2016/11/observacion\\_gnral\\_19\\_presupuestos\\_derechos\\_infancia.pdf](https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2016/11/observacion_gnral_19_presupuestos_derechos_infancia.pdf)

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2016, 24 septiembre). ADOPCIÓN. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD SE BASA EN LA IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES, DENTRO DE LA CUAL SON IRRELEVANTES EL TIPO DE FAMILIA AL QUE AQUÉL SERÁ INTEGRADO, ASÍ COMO LA ORIENTACIÓN SEXUAL O EL ESTADO CIVIL DE ÉSTOS. Semanario Judicial de la Federación. Recuperado 2 de noviembre de 2023, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012587>

González de Alba, L. (2003). *La Orientación Sexual. Reflexiones sobre la bisexualidad originaria y la homosexualidad*. Ciudad de México: Paidós Ibérica.

Los organismos de las Naciones Unidas instan a los Estados a que tomen medidas urgentes para poner fin a la violencia y a la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). (2015, septiembre). United Nations Human Rights. Recuperado 2 de noviembre de 2023, de [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/Joint\\_LGBTI\\_Statement\\_ES.PDF](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF)

## CONCLUSIÓN

El cierre de este segundo tomo dedicado a los *Derechos Humanos LGBTTTIQ+* nos sumerge en un análisis de las realidades jurídicas y sociales que afectan a la comunidad, abordando temas cruciales como la violencia de pareja, la precariedad laboral, la pensión compensatoria, el matrimonio igualitario y la igualdad jurídica. Cada capítulo ha sido una ventana a las experiencias, luchas y desafíos únicos que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ en la búsqueda de una vida digna y justa.

Este tomo se erige como una amalgama de cuatro capítulos, cada uno destapando capas complejas de discriminación, vulneración de derechos y desigualdad en el contexto de la diversidad sexual. Desde la violencia de pareja hasta la precariedad laboral, cada tema se conecta intrínsecamente con la experiencia de la comunidad LGBTTTIQ+, proporcionando al lector una visión más completa de la realidad que enfrenta.

El primer capítulo destaca la complejidad de las relaciones de pareja en la comunidad LGBTTTIQ+, revelando dinámicas específicas y desafíos únicos que emergen en el ámbito doméstico. La violencia intragénero, enmarcada en un sistema patriarcal y de dominación masculina, pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar estas cuestiones desde una perspectiva legal y social. La vulneración de los Derechos Humanos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se destacó como una preocupación central, exigiendo sanciones para quienes perpetúan la discriminación.

El segundo capítulo exploró las inequidades económicas que enfrenta la población LGBTTTIQ+, centrándose en la pensión compensatoria y su aplicación en el Estado de Veracruz. El análisis detallado de la legislación y casos prácticos reveló barreras legales que limitan el acceso a este derecho para la comunidad. La igualdad de derechos y oportunidades se convirtió en el lema, llamando a la erradicación de prejuicios y a la aplicación imparcial de la ley en todos los tipos de matrimonios.

El tercer capítulo iluminó la precariedad laboral que enfrenta la comunidad trans, abogando por la implementación de una ley de cupo mínimo. Desde los fundamentos constitucionales hasta la necesidad de campañas inclusivas, se delineó un camino para superar las discriminaciones laborales. La participación de la comunidad trans en la formulación y aplicación de estas leyes se destacó como esencial, subrayando que la igualdad de oportunidades no solo es un acto de justicia social, sino también un motor para el desarrollo económico del país.

El cuarto capítulo exploró la homoparentalidad, evidenciando los prejuicios sociales que afectan a los matrimonios igualitarios. La discriminación, tanto social como jurídica, se posicionó como un obstáculo sustancial para el desarrollo pleno de estas familias. La conclusión clara es que la consolidación de una familia mediante la adopción es un derecho respaldado por la legislación y estatutos internacionales, y cualquier forma de discriminación debe ser desterrada para permitir el ejercicio pleno de este derecho fundamental.

Este tomo es, sobre todo, un llamado a la acción. La erradicación de la discriminación y la promoción de la igualdad no son solo actos de justicia social, sino también pilares fundamentales para el desarrollo económico y la diversidad en el país. La sociedad debe concientizarse y abandonar los prejuicios que perpetúan la discriminación. La igualdad de derechos y oportunidades para la comunidad LGBTTTTIQ+ no solo es un sueño, sino una meta alcanzable a través de la acción colectiva, la educación y la aplicación imparcial de la ley.

En última instancia, este tomo es una contribución valiosa al diálogo en pro de la igualdad y la justicia, instando a una sociedad más inclusiva, respetuosa y equitativa. Que estas reflexiones inspiren cambios reales y duraderos en la percepción y trato hacia la comunidad LGBTTTTIQ+, allanando el camino hacia un futuro donde los Derechos Humanos sean genuinamente universales y accesibles para todos.

El tiraje digital de esta colección: “Derechos de la comunidad LGBTTTIQ+” y en particular de este “Tomo II” se realizó posterior a un riguroso proceso de arbitraje doble ciego, llevado a cabo por dos expertos miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) en México, así como revisión anti plagio y aval del Consejo Editorial del Fondo Editorial para la Investigación Académica (FONEIA). Primera edición digital de distribución gratuita, febrero de 2024.

El Fondo Editorial para la Investigación Académica es titular de los derechos de esta edición conforme licencia Creative Commons de Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). Las coordinadoras Rosa María Cuellar Gutierrez y María Eugenia Campos Zavala, así como cada una de las coautoras y coautores son titulares y responsables únicos del contenido.

Diseño editorial y portada: Williams David López Marcelo

Requerimientos técnicos: Windows XP o superior, Mac OS, Adobe Acrobat Reader.

Editorial: Fondo Editorial para la Investigación Académica (FONEIA). [www.foneia.org](http://www.foneia.org)  
[consejoeditorial@foneia.org](mailto:consejoeditorial@foneia.org), 52 (228)1383728, Paseo de la Reforma Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México

COLECCIÓN DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+:

ISBN: 978-607-69529-1-7



TOMO II:

ISBN: 978-607-69529-7-9



# DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTTIQ+



---

Coordinadoras

ROSA MARÍA CUELLAR GUTIERREZ

MARIA EUGENIA CAMPOS ZAVALA



Fondo  
Editorial para la  
Investigación  
Académica

# Sinopsis

El segundo tomo del libro Derechos Humanos LGBTTTIQ+ es una obra que aborda de manera exhaustiva la importancia de la protección de los derechos y su vinculación con la diversidad sexual y la comunidad LGBTTTIQ+. A través de estos primeros cuatro capítulos se exploran diferentes temáticas relacionadas con la violencia de pareja, la violencia intragénero, la pensión compensatoria, la precariedad laboral, el cupo mínimo laboral, la adopción, el matrimonio igualitario y la igualdad jurídica. El viaje comienza con una profunda exploración de las dinámicas intrínsecas a las relaciones de pareja en la comunidad LGBTTTIQ+ en el Capítulo I, desentrañando el velo de la "Violencia de pareja y violencia intragénero en parejas LGBTTTIQ+". Este análisis meticuloso no solo identifica las manifestaciones de violencia, sino que también propone estrategias para erradicar este fenómeno insidioso y garantizar relaciones basadas en el respeto y la igualdad. El Capítulo II nos sumerge en las complejidades legales y económicas que rodean a la población LGBTTTIQ+ en el Estado de Veracruz, centrándose en la pensión compensatoria y su aplicación en el Estado de Veracruz. Aquí, se arroja luz sobre las inequidades económicas que persisten y se aboga por una revisión integral de las políticas para asegurar una distribución justa de los recursos. Posteriormente, el Capítulo III abre la puerta a la realidad laboral de la comunidad trans en México, señalando la urgencia de una ley de cupo mínimo laboral como medio para abordar la precariedad laboral y construir un ambiente más inclusivo y equitativo. La obra culmina con el Capítulo IV, donde se examina el entrelazamiento crucial entre adopción, matrimonio igualitario e igualdad jurídica de las personas LGBTTTIQ+. Este libro es, en última instancia, una contribución vital al diálogo en curso sobre la universalidad e inalienabilidad de los Derechos Humanos, destacando la necesidad de un compromiso continuo con la justicia y la igualdad para todos.

